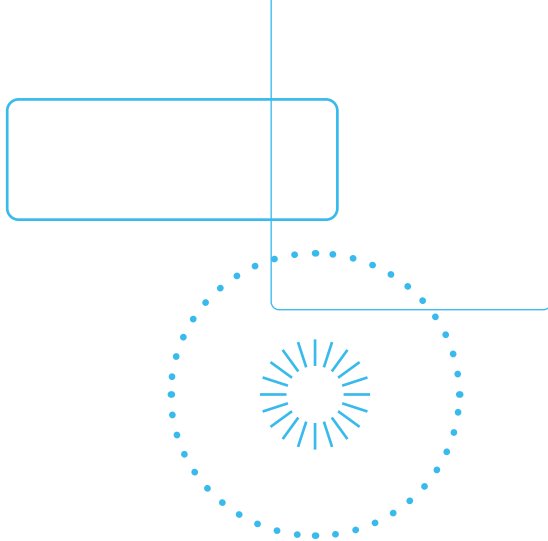


Democracia en red

Internet, sociedad y política en la Argentina

Andrea Ramos
(compiladora)





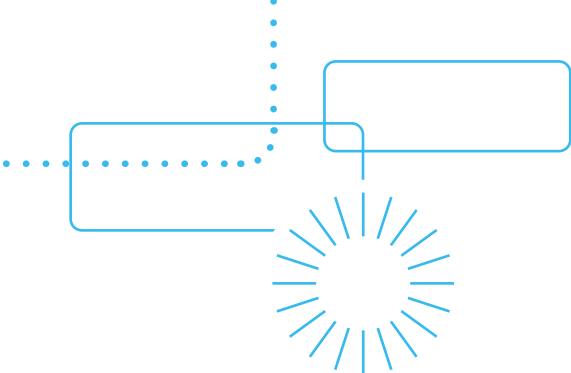
En septiembre de 1987 nuestro país registró oficialmente su ccTLD .ar, que lo identifica en Internet. Hoy NIC Argentina es el organismo nacional responsable de la administración del registro del Dominio de Nivel Superior (.ar) y de la publicación del DNS (Domain Name System) para el dominio .ar.

El equipo de NIC Argentina trabaja de manera constante para brindar a todas las personas una mejor experiencia con Internet. A su vez, lleva adelante distintas iniciativas para fomentar el acceso en igualdad de condiciones a una Internet segura y confiable, priorizando la inclusión, la transformación y la soberanía digital como elementos claves para el desarrollo del país.

Al cumplirse 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, desde NIC Argentina nos sumamos con este libro a las celebraciones y debates que se multiplican en distintos formatos y plataformas.

Democracia en red

Internet, sociedad y política en la Argentina



Autoridades

Dr. Alberto Fernández

Presidente de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Vicepresidenta de la Nación

Dra. Vilma Ibarra

Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación

Dr. Emiliano Suaya

Subsecretario Técnico

Lic. Andrea Ramos

Directora Nacional del Registro de Dominios de Internet

Democracia en red

Internet, sociedad y política en la Argentina

Andrea Ramos
(compiladora)

Ángeles Alemandi • Natalia Aruguete • Martín Becerra
Bernadette Califano • María Esperanza Casullo
Arnaldo Rodrigo Cuevas • Sebastián Davidovsky • Javier Díaz
Florencia Enghel • Brenda Focás • Agustín Mario Gimenez
Tali Goldman • Cecilia González • Esteban Lescano • Cecilia Lesgart
José Néstor Lino • Mariana Maggio • Carolina Martínez Elebi
Mariana Moyano • Valentín Muro • Javier Pallero
Marcela Pallero • Raquel Robles • Ximena Romero
Sergio Andrés Rondán • Juan Ruocco • Sofía Scasserra
Pablo Semán • Clara Sirvén • Emiliano Suaya • Gabriela Sued
Verónica Torras • Gabriel Vinazza • Gabriel Vommaro
Nicolás Wolovick • Candela Yatche • Esteban Zunino



Secretaría
Legal y Técnica
Argentina



Democracia en red : internet, sociedad y política en la Argentina / María Esperanza Casullo ... [et al.] ;
compilación de Andrea Ramos ; editado por Lucila Schonfeld. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires : Secretaría Legal y Técnica, 2023. Libro digital, PDF
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-48729-7-5
1. Internet. 2. Democracia. I. Casullo, María Esperanza. II. Ramos, Andrea, comp. III. Schonfeld, Lucila, ed.
CDD 320.014

2023, NIC Argentina
Suipacha 767 - 3º piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
nic.ar

Coordinación: **Andrea Ramos**

Asesoría general: **Martín Becerra**

Edición: **Lucila Schonfeld**

Ilustración de tapa: **@Costhanzo**

Realización de cubierta y diseño de interiores: **Trineo**

Producción: **Juan Biedma, Pablo Gutiérrez, Aldo Juárez, Laura Loise,
Antonella Pascuali, Romina Sofi, Tamara Zylbersztejn**

Diseño web: **Gabriela Marzolini**

Asesoría legal: **Bárbara Dattile, Marcelo Mársico**

Asesoría administrativa: **Florencia Gómez Silingo, Guadalupe Armada**

Publicación de la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet,
Subsecretaría Técnica, Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2023.

Impreso en la Argentina

ISBN: 978-987-48729-7-5

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

Esta edición de 3.000 ejemplares se terminó de imprimir en Casano Gráfica
Ministro Brin 3932 (1826), R. Escalada (Lanús), Provincia de Buenos Aires,
en el mes de julio de 2023.

La reproducción de sus partes o en su totalidad es libre, siempre que sea citada la fuente.

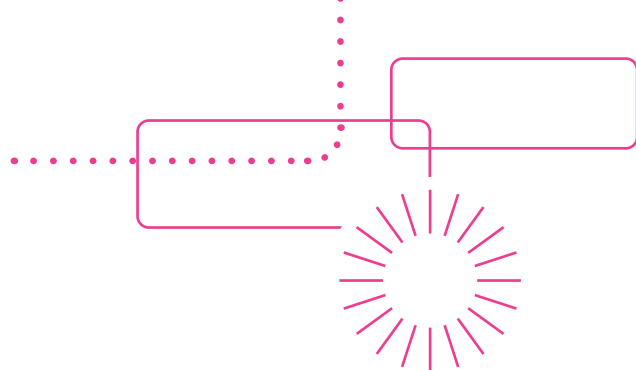
Distribución gratuita. Prohibida su venta.



Secretaría
Legal y Técnica
Argentina



Dirección Nacional del Registro
de Dominios de Internet



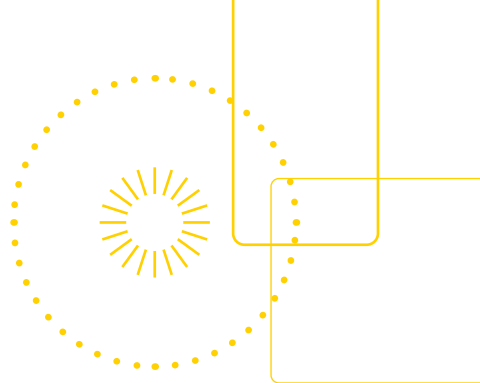
Índice

Prólogo Vilma Ibarra	11
Introducción Andrea Ramos	15
Panorámicas	
Internet, esfera pública y sistema de partidos en la Argentina a 40 años de democracia María Esperanza Casullo	21
Palabras (y más palabras) y cosas de la democracia en comunicaciones Martín Becerra	29
Tecnología y participación política: los vaivenes de una promesa Gabriel Vommaro	37
Más innovación, más religión Pablo Semán	47
Educación y tecnologías en la Argentina democrática La inclusión, entre las tensiones persistentes y las emergentes Mariana Maggio	53

Cuatro tesis sobre información y democracia en la convergencia digital	
Esteban Zunino	63
Internet, desigualdades y políticas públicas	
Bernadette Califano	73
 En foco	
Justicia de género en línea: navegar, naufragar, insistir	
Florencia Enghel	83
Cultura memética y democracia	
Juan Ruocco	91
Un mundo del trabajo vertiginoso, un trabajo decente posible	
Sofía Scasserra	101
La democracia y el riesgo de la agenda emocional: indignarnos para gobernarnos a todos	
Mariana Moyano	109
El golpe de Estado y la transición a la democracia	
Intelectuales, académicos y espacio público político	
Cecilia Lesgart	119
Consensos y disputas en redes sociales	
Natalia Aruguete	129
Capturar y almacenar: los desafíos para cuidar nuestros datos	
Sebastián Davidovsky	139
Internet, del reduccionismo a las soluciones adecuadas	
Javier Pallero	147
Las otras redes	
Ángeles Alemandi	157
Internet y universidades argentinas	
Javier Díaz	167
La era digital y la gestión de la información: pilares de la democracia moderna en la Argentina	
Agustín Mario Gimenez	177
Producción y consumo de las noticias de inseguridad en tiempos de Internet	
Brenda Focás	185

Democracia y ciberseguridad	
Marcela Pallero	193
La inteligencia artificial que no vimos venir	
Gabriela Sued	201
Libertad de expresión y el cuidado de la democracia	
Emiliano Suaya	213
Buscando un símbolo de paz	
Vaivenes entre democracia, poder, música y artistas	
Clara Sirvén	219
“Arte tecnológico”, Internet y democracia	
Del cybercirujeo al coleccionismo	
Gabriel Vinazza	227
 Primeros planos	
Derecho a la identidad: Abuelas de Plaza de Mayo y el legado de una lucha perenne en la era digital	
Cecilia González	239
Estar conectados en democracia	
Carolina Martínez Elebi	247
La nave de la curiosidad	
Valentín Muro	255
Una historia de los BBS argentinos	
Sergio Andrés Rondán	263
Clementina	
Raquel Robles	271
Las telecomunicaciones en el Valle de Amblayo	
Redes de conectividad comunitaria	
Arnaldo Rodrigo Cuevas	279
El acceso a los archivos de derechos humanos creados y gestionados desde las organizaciones de la sociedad civil	
Verónica Torras	287
Desafíos de los entornos digitales para la accesibilidad a 40 años de democracia	
Ximena Romero	293
Cybercirujeo para la construcción de una ciudadanía digital	
Nicolás Wolovick	303

Nuevas tecnologías, nuevas problemáticas	
Candela Yatche	309
Más cooperativismo para un acceso igualitario a los derechos digitales	
José Néstor Lino	315
Los proveedores de acceso a Internet (ISPs): actores clave del acceso universal a la conectividad	
Esteban Lescano	323
Don Quijote y los molinos de viento	
Tali Goldman	331
Glosario	339
Quiénes escriben	347



Prólogo

Vilma Ibarra

Nuestra democracia cumple 40 años. Estas cuatro décadas ininterrumpidas merecen ser celebradas. Una buena forma de hacerlo, sin dudas, es compartir el esfuerzo y el trabajo para fortalecer, profundizar y ampliar los alcances de nuestra joven democracia.

Este aniversario nos encuentra atravesando momentos difíciles y desafiantes: entre otros aspectos, estamos asistiendo, en nuestro país y en el mundo, a una transformación tecnológica y cultural inédita por su alcance y su aceleración, además de enfrentar dificultades internas y también otras provenientes del ámbito internacional, desde el punto de vista político y económico.

Para atravesar con éxito esta etapa es necesario enriquecer el debate público, contar con espacios de intercambio profundo, diverso y creativo; debatir con libertad y animarnos a desafiar ideas preestablecidas. Necesitamos generar debates que permitan encontrar respuestas nuevas a antiguas preguntas y den lugar a la reflexión y a la formulación de interrogantes vinculados a una vida que, a esta altura, se parece en muy pocos aspectos a la de 10, 20 o 30 años atrás. Estos cambios nos exigen pensar al respecto, tal como lo hacemos a lo largo de los treinta y siete artículos que inte-

gran este libro y que dan cuenta de muchas de las grandes transformaciones a las que asistimos.

La joven democracia argentina nació con una promesa que traía consigo una esperanza: con la democracia se come, se educa y se cura. Más allá de las numerosas deudas pendientes y de la falta de concreción de muchos sueños todavía vigentes, hoy también necesitamos preguntarnos en qué medida el acceso pleno a esos derechos está vinculado a Internet. Que una herramienta como la red de redes tenga una centralidad tan indiscutida para nuestro desarrollo y bienestar sintetiza de alguna manera el motivo principal de este libro que publicamos desde NIC Argentina. Necesitamos debatir los desafíos de la democracia también desde la perspectiva del acceso a Internet.

Nadie pone en duda las grandes transformaciones que la digitalización masiva significó en el mundo del trabajo, del comercio, de la industria, de la educación, de la salud, de la política, de las relaciones sociales y afectivas. Es un suceso global que, de una u otra forma, incide más o menos profundamente en casi todos los aspectos de nuestras vidas.

Cuando hablamos de grandes transformaciones nos referimos a evidencias concretas: a la forma de ver cine, de escuchar música, de acceder a turnos para vacunación, a la atención de la salud, a realizar trámites, o al uso de aplicaciones para conocer gente, al desarrollo de emprendimientos *on line*, a la realización de cursos de capacitación, o a la posibilidad de trabajar y de comunicarnos. La lista es realmente muy larga.

En este mundo en transformación también hay cuentas de WhatsApp hackeadas, circulación de discursos de odio, nuevas formas de cometer delitos y nuevos delitos, estafas, *fake news* y muchos etcéteras. En este caso también la lista es muy extensa.

Sabemos de muchas personas y áreas territoriales totalmente excluidas del uso de Internet porque la señal no llega, porque el dispositivo no es bueno o simplemente porque no se alcanza la capacitación necesaria para usar ciertas tecnologías.

Frente a la profundidad de esas transformaciones, desde esta Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación se trabaja

a través de NIC Argentina para fortalecer el dominio .ar que identifica a nuestro país en el mundo y, también, para impulsar la seguridad, la inclusión y la transformación digital.

Los programas de Accesibilidad web y Soy Tu tienda son una muestra de esta tarea. Trabajamos para que el Estado se involucre de manera integrada, generosa y comprometida para ofrecer soluciones concretas a problemas reales y actuales. Buscamos promover una Internet accesible para todas las personas y ayudar a profesionalizar emprendimientos comerciales y productivos en todo el país.

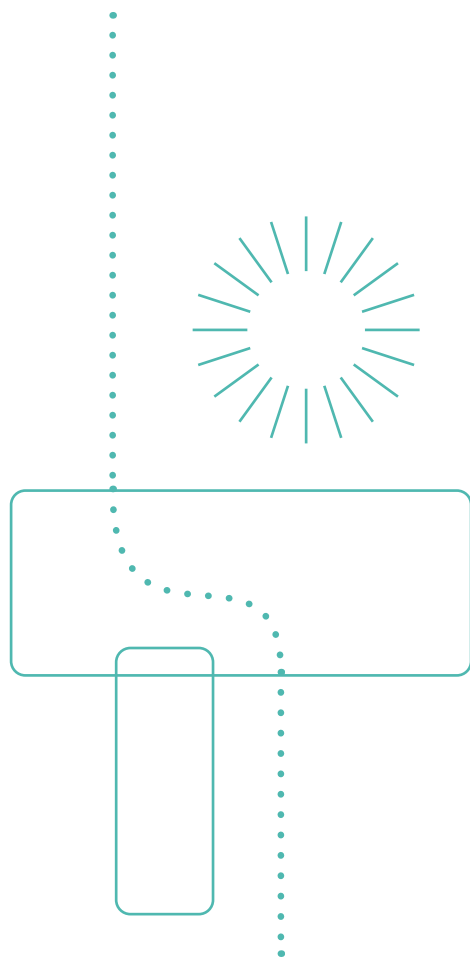
Se avanzó mucho, pero queda aún mucho más por hacer.

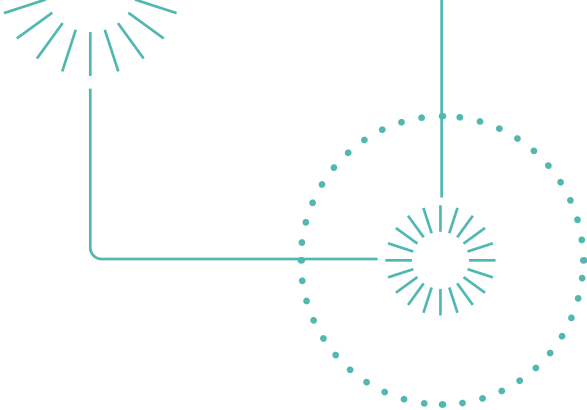
A 40 años de la finalización de la última dictadura cívico-militar y de la recuperación de nuestra legalidad de gobierno, nos encontramos ante la necesidad de reafirmar los cimientos mismos de nuestros consensos democráticos: nuestro compromiso con los derechos humanos, la ética de la solidaridad y la lucha por la igualdad, entre muchos otros.

Este nuevo libro nace porque sabemos de la profundidad de los cambios que vivimos y del rol central que tiene Internet en las vidas contemporáneas. Y porque tenemos el compromiso de trabajar para el fortalecimiento y la consolidación de esos valores.

Necesitamos espacios para debatir con reflexión y respeto, espacios que promuevan la búsqueda de soluciones creativas. Este libro es un aporte en ese camino.

Gracias a las autoras y los autores que se sumaron para aportar sus miradas y gracias a todas las personas que hicieron que este libro se haga realidad.





Introducción

Andrea Ramos

Estamos transitando el año 2023 y el 10 de diciembre se van a cumplir 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina. Internet es hoy una de las dimensiones clave por donde pasan algunas de las principales preguntas que podemos hacernos ante este aniversario.

Desde NIC Argentina nos sumamos a las celebraciones y discusiones que durante este año se multiplican en distintos formatos y plataformas.

Por este motivo, y para dar continuidad a un proyecto iniciado en 2022 a partir de los 35 años del registro oficial del dominio .ar que representa a nuestro país en el mundo de Internet, quisimos seguir impulsando debates e intercambios de experiencias alrededor de la red y su relación con las principales cuestiones que componen la construcción cotidiana de la vida democrática.

Buscamos generar un espacio abierto y plural, que incluye un libro –que puede estar en tus manos–, un audiolibro –que quizás escuches durante una caminata, en este mismo momento– y otras piezas complementarias. Queremos hacer un aporte para promover conversaciones que ayuden a construir nuevos sentidos compartidos.

Igualdad y desigualdad, brechas digitales, libertad de expresión, consensos democráticos, información y desinformación, políticas públicas, participación política, religión, educación, trabajo, géneros, ciudadanía digital, rol de los Estados, historia, soberanía, nuevas formas de consumos culturales, derechos humanos, seguridad, redes comunitarias, uso de datos, algoritmos e inteligencia artificial serán algunos de los temas que van a encontrar en los 37 artículos que integran este volumen.

En algunos textos la relación entre Internet y los desafíos de la democracia aparece muy explícitamente. En otros, esa vinculación está sobreentendida o apenas sugerida. Es en el debate integral y la sumatoria de miradas donde encontramos los senderos necesarios para seguir recorriendo esta reflexión imprescindible y enriquecerla.

Los artículos están organizados en tres partes. Tanto la organización como los títulos de cada una de ellas responden a una decisión editorial y quizá tienen algo de capricho o cierto azar. También hacemos una invitación a que cada persona lea o escuche inventando una secuencia propia.

La primera parte, que llamamos “Panorámicas”, agrupa textos que tienen una mirada abarcativa y extendida en el tiempo para proponer pensar las transformaciones desde un punto de vista más estructural.

“En foco” es el título del segundo grupo de textos, que reúne artículos sobre algunos de los temas centrales de la vida democrática contemporánea, observaciones profundas sobre asuntos específicos.

Finalmente, en la tercera parte, “Primeros planos”, los artículos trabajan sobre experiencias, historias de vida o miradas que desde lo personal o particular hablan de lo colectivo, y a la vez acercan asuntos fundamentales de las acciones en Internet, de la vida con Internet en los tiempos que corren.

Todas las palabras serán pocas para agradecer.

A todas las personas que escribieron para este libro y que con tanta generosidad se sumaron con creatividad al proyecto.

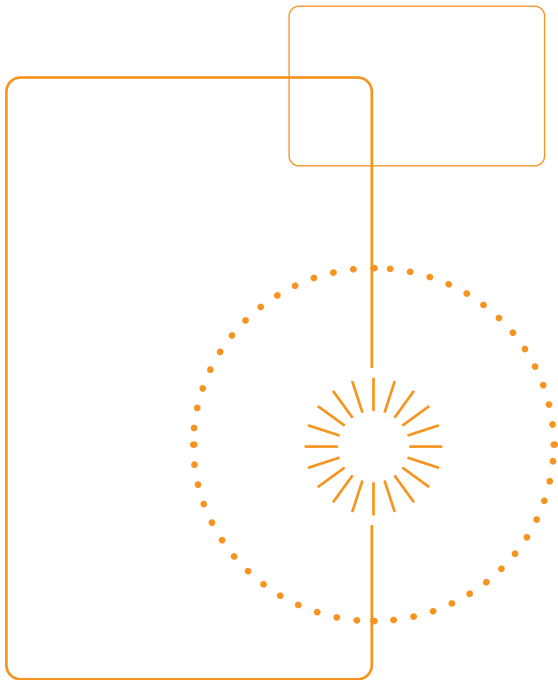
A cada integrante del equipo que trabajó para que este libro exista. Son muchísimas personas comprometidas con hacer un aporte para construir una Internet mejor y una democracia más fuerte y más justa.

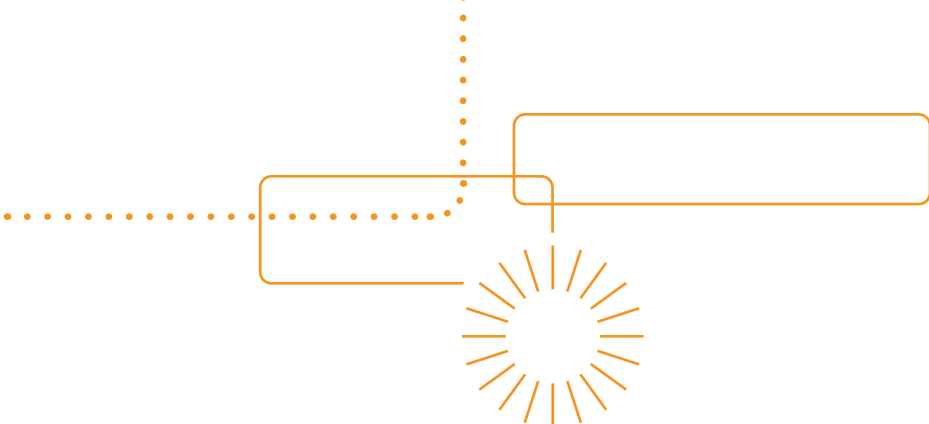
A las autoridades de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, que impulsaron la idea y la acompañaron durante todo el camino.

Y como siempre, gracias a cada trabajadora y cada trabajador de NIC Argentina. Son un ejemplo de entusiasmo, responsabilidad y capacidad de trabajo.

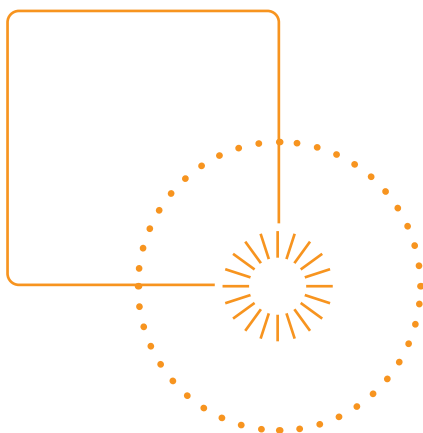
Una vez más quisimos ser anfitriones de una construcción coral que nos permita detenernos a pensar y preguntarnos cómo llegamos hasta acá y cómo queremos seguir adelante.

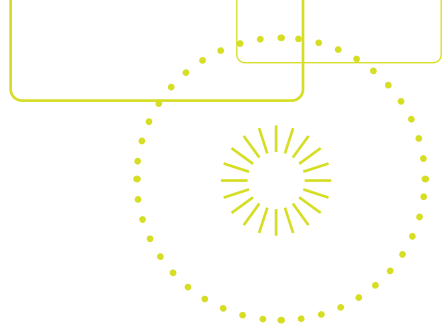
A 40 años de aquellos inolvidables días de 1983 hacemos una invitación para recuperar la historia, pensar el presente e imaginar un futuro donde Internet sea cada vez más una herramienta para más democracia.





Panorámicas





Internet, esfera pública y sistema de partidos en la Argentina a 40 años de democracia

María Esperanza Casullo

La película *Argentina, 1985*, estrenada en 2022, resalta por varias cosas: por mostrar bien el miedo que dos años después de finalizada la dictadura militar aún saturaba la vida, por reflejar la esperanza cifrada en la joven democracia, y por denunciar la posibilidad real de un retroceso autoritario. La muy buena reconstrucción de época del film también ofrece la posibilidad de recordar cómo se hacía el día a día de la administración del Estado cuatro décadas atrás: máquinas de escribir con teclas mecánicas y rollos de cinta entintada, comunicaciones por teléfono de línea –exclusivamente–, archivos fotográficos en papel. En una de las escenas centrales de la película, el equipo del fiscal Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y sus jóvenes ayudantes, entregan por mesa de entradas el paquete con la totalidad de la prueba recolectada para ser utilizada en la acusación contra los jefes de la represión. Las pilas de papeles a ser ingresados al expediente tienen que ser transportadas en un carro con ruedas.

Pero no solo el día a día del Estado. En otra de las escenas clave se ve cómo al cierre de cada jornada de audiencias en Tribunales un tropel de periodistas sale corriendo, con las notas que habían tomado, para llegar primeros a algunos de los teléfonos públicos

de ENTel tipo “bicho bolita”, y allí dictar el reporte a algún editor o editora que estaría, seguramente, pendiente del timbre del teléfono de línea. Al mismo tiempo, también la política es mostrada como un “detrás de escena” que tiene sus tiempos y sus rituales, y que es filtrada al gran público por un número pequeño de enunciadores legitimados, que la anotan, explican y traducen, en un proceso que también tiene sus tiempos y sus mediaciones. Finalmente, uno de los núcleos emotivos centrales del film es la escena que comienza con la cámara fija en un plano de la familia del fiscal mirando por TV una transmisión sobre el juicio, para luego salir al balcón y revelar que en muchos otros departamentos de la ciudad todas las personas estaban mirando lo mismo, unificadas en un consumo noticioso.

Pensemos cómo sería ahora. El juicio sería tuiteado en vivo y en directo, minuto a minuto.

Los expedientes habrían sido seguramente filtrados a la prensa, incluso meses antes de las audiencias. *Influencers* y autoproclamados expertos de todo tipo darían su opinión vía redes sociales, en paneles televisivos –políticos o de chimentos– y en vivos de Instagram. Es muy probable que los testigos fueran víctimas de campañas de deslegitimación y rumores de dudosos orígenes a través de las redes sociales, con uso de cuentas de incierta procedencia. Mucha gente miraría los juicios por TV, pero muchos más verían resúmenes o videos cortos vía Facebook, Twitter o Instagram. Tal vez alguno de los jóvenes abogados del equipo de Strassera saltara a la política desde la fama conseguida; tal vez algunos de los acusados o sus abogados postearan vivos o *spaces*.

En definitiva, *Argentina, 1985* puede usarse como punto de partida para comparar dos esferas públicas notoriamente diferentes: antes y después de la masificación de la red de comunicación descentralizada que conocemos como Internet.

En los años de la transición democrática la esfera pública estaba notablemente centralizada y restringida, por varias razones. La primera, que la Argentina ingresó a la democracia luego de siete años en los cuales la dictadura militar hizo del control sobre la

información y los medios de comunicación uno de sus ejes centrales. Hay que recordar que la Junta Militar fue más allá de la típica conducta autoritaria que intenta reducir el flujo, la calidad y la veracidad de la información. Los dictadores llevaron a cabo un experimento consistente en intentar dar forma a una comunicación centralizada *positiva*, totalizante, que incluyó contratar a agencias transnacionales de publicidad para generar contenidos, organizar un mundial de fútbol y promover figuras y formatos de “la farándula”, la música y el espectáculo.

La segunda razón tiene que ver con una limitación de tipo simplemente empírico: en los años de la crisis final de la era de sustitución de importaciones, el acceso a las tecnologías de la información era muy limitado. En un país extenso, con mala conectividad, era difícil acceder a consumos simples como los diarios mal llamados “nacionales”, que llegaban a las provincias por avión luego del mediodía. Ni hablar de TV o de radio.

Sin embargo, la sociedad argentina era y es una sociedad hambrienta de contenidos y de discusiones públicas. La Argentina se consolidó desde principios del siglo XX como un país con un alto porcentaje de población urbana y lectora, que fue además pionero en la radio (en el año 1920 se realizó aquí la primera transmisión de radio en vivo del mundo), que desarrolló un importante mercado de prensa escrita, que tuvo pioneros innovadores en la televisión y que alumbró revistas como *Crisis* o *Primera Plana*, con periodistas de nivel mundial.

No es sorprendente, entonces, que Internet causara entusiasmo en un país sediento de consumos culturales. (Según el Banco Mundial/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [2022], la Argentina era en 2022 el sexto país de América Latina con mayor porcentaje de hogares conectados a Internet por conexión física, algo bastante notable dada su extensión y lo disperso de su población fuera del área metropolitana.) La universalización de Internet cambió el consumo de información y, específicamente, de información política. *Argentina, 1985* (para volver al ejemplo) muestra de rellón los *locus* donde se construían las noticias políticas: el casi único

programa político de TV (el de Bernardo Neustadt), la tapa del diario que llegaba por la madrugada, el estudio de radiofonía. Este ecosistema político-informativo se alteró de manera irreversible.

Con la universalización de la Internet por banda ancha en la década de 1990 se abrieron una serie de expectativas sobre el impacto de la nueva tecnología en la política. Estas se concentraban en tres áreas: primero, la red iba a permitir una esfera pública más participativa, transparente y con mayor diversidad de voces; segundo, las nuevas tecnologías volverían menos necesarios a los partidos políticos, hasta tal vez eliminarlos; finalmente, la modernización de los procedimientos políticos (por ejemplo, permitiendo el voto por Internet) reduciría costos y aumentaría la confianza y la transparencia.

Ya transcurridos veinte años, podemos afirmar que el impacto de Internet en la organización política es mucho más matizado. Es difícil, si no imposible, asumir relaciones de causalidad, ya que los cambios sociales se dieron en varias dimensiones al mismo tiempo. Sin embargo, sabemos que la política en la era de Internet no se ha transformado de manera puramente positiva.

Empecemos por el último punto, el uso de nuevas tecnologías para modernizar procesos políticos, como por ejemplo el voto por Internet o voto electrónico. Si bien es cierto que en todo el mundo se avanzó en la tecnificación, esto no significó necesariamente una ganancia en transparencia. Al contrario, cuando existen instancias de duda ciudadana sobre elecciones, puede aumentar la desconfianza. Países como Holanda, Alemania, Irlanda y el Reino Unido prohibieron avanzar en esta dirección: la posibilidad del control ciudadano con papel y lápiz puede generar mayor confianza que los sistemas más complejos, solo comprensibles por expertos.

En cuanto a la calidad de la información que circula en la esfera pública, también los impactos son ambiguos. Por un lado, es innegable que podemos acceder a una mayor cantidad de información que en ningún otro momento de la historia humana. Minuto a minuto, nos enteramos de todo lo que sucede en el planeta. Según Pablo Boczkowski y Eugenia Mitchelstein (2022), el 75% del público argentino consume noticias vía su teléfono celular, y siete de cada días

accede a su consumo diario de noticias vía redes sociales (Facebook primero, YouTube y WhatsApp segundo, Instagram tercero).

Sin embargo, esto tampoco aumentó nuestra confianza en que entendemos lo que pasa. Paradójicamente, la multiplicación de la circulación de información vía sitios y redes de Internet no se tradujo, como muchos pensaban, en una mejoría del debate en la esfera pública. Fuimos muchos los que supusimos que la erosión de la legitimidad de los viejos lugares privilegiados de enunciación mediática (el diario, la radio, el noticiero de TV) redundaría en una horizontalización de la conversación pública que privilegiaría la fuerza del mejor argumento como criterio de autoridad. Supusimos que la red permitiría acceder a otras fuentes de saber experto más allá de los habituales periodistas varones y de clase media situados dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, treinta años después los resultados son profundamente ambiguos. Nunca fue tan fácil acceder a la información, y nunca fue tan difícil confiar en la calidad de la misma. Según Boczkowski y Mitchelstein (ibídem), solo el 35% de los argentinos confía en la calidad de las noticias que reciben (valor menor al promedio de la región, que es de 42%).

Sin embargo, paradójicamente, al mismo tiempo que confiamos menos en la veracidad de la información que recibimos, nos indignamos mucho más por lo que leemos o vemos. La desconfianza generalizada hacia la calidad y la confiabilidad de las noticias que se consumen no genera apatía; antes bien, se relaciona con el aumento generalizado de la polarización y la agresión política. Se cree menos en lo que se lee, pero aún así eso que se lee y no se cree genera *indignación*. Las noticias políticas circulan hoy en comunidades cerradas, en donde los individuos interactúan más frecuentemente con quienes coinciden cognitiva y afectivamente (Zuazo y Aruguette, 2021: 141). Además, la polarización se combina con una dinámica de burbujas de las redes sociales: las noticias que generan un efecto emotivo basado en la indignación circulan más rápidamente, en comunidades que se las envían y se indignan en conjunto (Calvo y Aruguette, 2020).

Un tercer efecto tiene que ver con la transformación del discurso político. Muchos (no todos, pero una mayoría) de los discursos políticos buscan entrar en esa dinámica de rápida circulación en comunidades amigas basadas en la indignación. Esto ha quedado a la vista en los últimos debates en el Congreso argentino, donde se generalizaron conductas cuya finalidad es impactar fuera del ámbito legislativo, como interrumpir, insultar, levantarse a los gritos. El objetivo no es tanto incidir en el resultado de una votación como asegurar un recorte de 30 segundos que “se vuelva viral”.

No se trata de idealizar una supuesta edad de oro del debate civilizado que en realidad nunca existió, sino de señalar que la lógica de la comunicación instantánea, viral e indignada entra en contradicción con un supuesto de la vida en una república representativa, que supone que negociar no es una mala palabra.

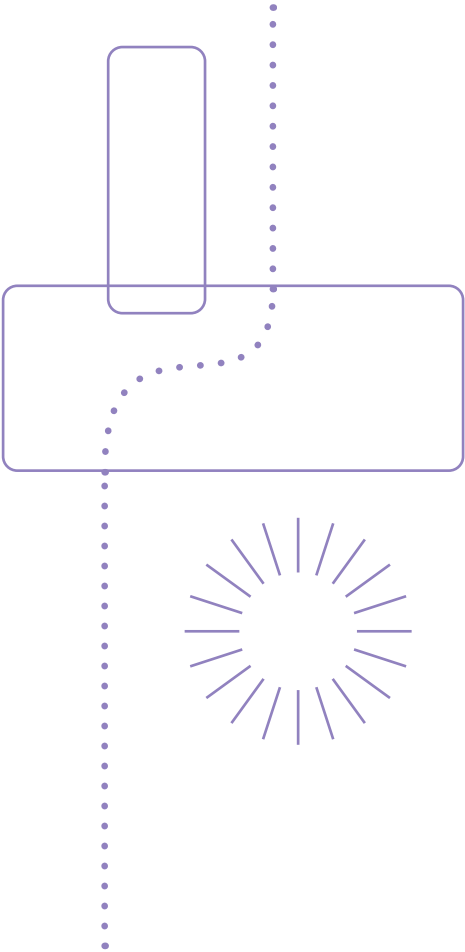
Un cuarto y último efecto relacionado: la erosión del funcionamiento interno de los partidos. La viralización también se relaciona con cambios en varias áreas. Una de ellas son los mecanismos por los cuales se puede llegar, o pretender llegar, a posiciones de liderazgo. Durante décadas se suponía que para llegar a estar “expectante” una persona debía ingresar a un partido (mejor si joven), ir a infinidad de reuniones, pegar carteles, ganar algún cargo electivo de menor jerarquía, e ir escalando desde ahí. Este *cursus honorum* nunca estuvo forjado en hierro, y siempre podía ser cortocircuitado por un cantante popular como Ramón Palito Ortega o un deportista exitoso como Carlos Reutemann. Una de las razones del triunfo de Carlos Menem fue sin dudas su manejo comfortable de una imagen relacionada con el espectáculo y la farándula, así como la carrera de Mauricio Macri es inseparable de su gestión al frente del club Boca Juniors. Sin embargo, Carlos Menem no habría llegado a la presidencia sin ser antes gobernador, y Mauricio Macri pasó ocho años fogueándose como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires antes de candidatearse a presidente. En las últimas elecciones hemos visto, sin embargo, un número récord de candidatos que saltaron del periodismo a la política, o que se hicieron conocidos por ser usuarios de Twitter o que apalancaron su fama como *influencers*

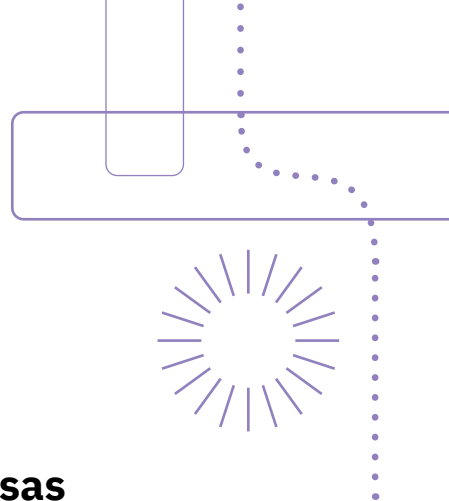
en YouTube para saltar a la cabeza de una lista. Esto podría significar una bienvenida ampliación de la comunidad política, pero (otra vez) hay una contradicción entre la visibilidad continua del *influencer* y el tedioso y rutinario trabajo cotidiano necesario para llevar adelante la gobernanza de un país complejo. Además, y paradójicamente, otro efecto colateral es que a las mujeres, personas trans y LGBTQI+ les cuesta más hacer uso de esas vías de entrada, pues son blancos mucho más frecuentes de las campañas de indignación.

En síntesis: si la esfera pública, los partidos y la gestión del Estado tenían sus áreas de opacidad y sus mediaciones antes de la irrupción de Internet, la vida política actual no puede caracterizarse como una de transparencia, participación y libertad sino, en todo caso, como una caracterizada por otras mediaciones y opacidades, otros peligros, y otros desafíos.

Bibliografía

- Banco Mundial/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2022). *Informe: Acceso y Uso de Internet en América Latina y el Caribe. Resultado de las encuestas telefónicas de alta frecuencia de ALC 2021*. Disponible en: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/undp-brlac-Digital-ES.pdf> [última consulta: 5 de mayo de 2023].
- Boczkowski, P. y Mitchelstein, E. (2022). “¿Cuáles son los medios que más se consumen en la Argentina?” Publicada en *Infobae*, 15 de junio. Disponible en: <https://www.infobae.com/sociedad/2022/06/14/cuales-son-los-medios-que-mas-se-consumen-en-la-argentina/> [última consulta: 5 de mayo de 2023].
- Calvo, E. y Aruguete, N. (2020). *Fake News, trolls y otros encantos. Cómo funcionan (para bien y para mal) las redes sociales*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Zuazo, N. y Aruguete, N. (2021). “¿Polarización política o digital? Un ecosistema con todos los climas”. En Ramírez, I., y Quevedo, L.A. (eds.), *Polarizados*. Buenos Aires: Capital Intelectual, 135-143.





Palabras (y más palabras) y cosas de la democracia en comunicaciones

Martín Becerra

De los múltiples significados que habitan en la frase “recuperación de la democracia”, tan citada a 40 años de 1983, uno de los más estables y compartidos es que la ciudadanía recobró los resortes de expresión de su voluntad. A fuerza de sintetizar, esta dimensión de la democracia se traduce en la elección mediante el voto popular de autoridades políticas y legisladores, pero también alude a la libertad de opinar, protestar, investigar y peticionar sin que las personas sean reprimidas o sancionadas por ello. Cuando se dice que la soberanía consiste en el poder en manos del pueblo, se apunta a la potestad de definir sus destinos, expresar sus ideas y acceder sin restricciones a una variada gama de opiniones del resto de la comunidad de pertenencia.

Por supuesto, hay muchas otras dimensiones y una larga historia de discusiones contenidas en los conceptos de democracia y soberanía, pero estas líneas exploran la relación entre la expresión (re)conquistada por la sociedad argentina en 1983 y su expansivo recorrido, que transgredió límites y convenciones vigentes en el país hasta entonces, a la vez que se combinó con la revolución de las comunicaciones digitales contemporánea, y sobre todo con su masificación a partir del cambio de siglo, lo que favoreció esa tarea.

La conquista de las potencialidades expresivas, hoy patrimonio común en parte opacado por urgencias y problemas estructurales que la democracia no solucionó –y que en algunos casos empeoró–, merece subrayarse por su carácter excepcional. Nunca antes en la Argentina la libertad de expresión –en sentido comunitario, que tiene a la sociedad como sujeto colectivo, pero también individual– había sido tan extendida como en las décadas que siguieron a 1983. Esta libertad contrastaba y contrasta incluso con la situación de países vecinos y con el ambiente predominante en el resto de la región latinoamericana.

En estos 40 años ampliar los límites de lo decible fue ampliar los límites de lo posible, parafraseando a Oscar Landi y su libro alumbrado en la primavera democrática alfonsinista, intitulado *El discurso sobre lo posible*. Agendas inimaginables en aquel entonces fueron incorporadas al debate público gracias a la articulación de actores sociales variopintos y luego muchas de ellas fueron instituidas como regulaciones, como la relativa a derechos sexuales y reproductivos. El problema es que el universo ampliado de lo decible y de lo posible no abasteció otras muchas necesidades materiales y simbólicas de una sociedad cada vez más compleja, diversificada y renovada.

En efecto, muchas de las expectativas de bienestar y mejora en las condiciones de vida de las mayorías no fueron concretadas en estas décadas de convivencia democrática. Por el contrario, las desigualdades se profundizaron a niveles cuyo dramatismo cuesta exagerar.

La soberanía de la expresión es inherente a la democracia, aunque, como no asegura la satisfacción de otras necesidades vitales, un riesgo que entraña es que la libre circulación de las palabras acabe siendo percibida como un tema menor –y, eventualmente, como un obstáculo– frente a asuntos de gran trascendencia, como los ingresos, el empleo, la inflación o la seguridad pública.

Por eso, escribir a 40 años de recuperación del régimen institucional de gobierno, con libertades y derechos obtenidos –y, en muchos casos, ampliados–, requiere al mismo tiempo ponderar aquellas

libertades y derechos que faltan y que duelen –como decía el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918–, precisamente porque faltan.

Las desigualdades –estadísticamente relevadas en los indicadores de pobreza que producen tanto el INDEC como organismos públicos provinciales, universidades, el sistema científico y también empresas– son una de las mayores aflicciones del país construido desde fines de 1983. Casi el 40% de las personas y casi el 30% de los hogares relevados por el INDEC se hallaban en situación de pobreza a fines de marzo de 2023.

La sociedad argentina ha elaborado y superado sucesivas crisis desde que el dictador Reynaldo Bignone le entregó la banda presidencial a Raúl Alfonsín. Trece presidencias de diversa orientación ideológica han transcurrido desde ese hito fundacional, pero la desigualdad fue consolidándose como rasgo estructural que resulta indisimulable. ¿Cómo convive esa desigualdad con la revolución de las comunicaciones que, contemporánea de las cuatro décadas de convivencia democrática, preconizaba mejores debates, acceso universal a fuentes de información y conocimiento diversas y documentadas, y maduración de las instituciones públicas y privadas protagonistas de la política republicana?

La respuesta más epidérmica a esa pregunta (“no muy bien: accedemos a más información y debatimos libremente, pero no sabemos cómo usar el conocimiento para mejorar las condiciones de vida de la mayoría”) está colmada de matices.

El sistema de medios de comunicación fue radicalmente transformado entre 1983 y la actualidad. Los soportes que distribuían información y opinión hace cuatro décadas constituían un ecosistema relativamente simple y escaso en cantidad de emisores que concentraban el poder de producir y hacer circular contenidos a través de redes tradicionales (la prensa, la radio y la TV abierta). La década de 1990 atestiguó la masificación de la pantalla multi-canal, con el acceso a la TV paga provista por cableoperadores y el inicio de la telefonía móvil. El cambio de siglo, a pesar de la crisis económico-social de 2001, continuó con novedades: Internet, cuyo

acceso creció notablemente desde 2005, fue cada vez más plattformizada (dominada por grandes plataformas digitales), personalizada (la navegación de servicios, redes sociodigitales y aplicaciones es cada vez más individual y dependiente de la huella digital de usuarias y usuarios); las generaciones de comunicaciones móviles transformaron un servicio de llamadas de voz en una red multi-servicios y multiaplicaciones inimaginada hace tan solo 20 años; y las redes audiovisuales se nutrieron de ofertas de programación a demanda, con proveedores de contenidos en *streaming* que se multiplicaron a medida que las conexiones físicas y móviles fueron mejorando en su capacidad.

El Estado argentino creó la empresa ArSat y construyó la Red Federal de Fibra Óptica (ReFeFO), mientras que operadores privados y cooperativos de conectividad llevaron el servicio a cada vez más localidades.

La universalización de los dispositivos móviles ha acercado la posibilidad de buscar datos, noticias y opiniones; contactar con afectos y con personas lejanas; construir comunidades de afinidades que de otro modo sería dificultoso concretar; producir y enviar información; acceder a entretenimientos variados y realizar compras; vender servicios y productos y efectuar trámites con las administraciones públicas. Las tecnologías acortan tiempos y distancias, y para muchas tareas cotidianas (y no tan cotidianas) ello es práctico, funcional y beneficioso.

La contracara de esas ventajas es la entrada en una etapa en la que los límites entre lo real y lo falso se desdibujan, dado que los adelantos en Inteligencia Artificial pueden adulterar imágenes, sonidos y textos con facilidad, a la vez que la extracción de datos personales, su comercialización y aprovechamiento para fines a los que sus titulares no dieron consentimiento –y que en muchos casos contravienen leyes vigentes–, forma parte del modelo de negocios extendido de las grandes plataformas digitales, con la consecuente modificación de fronteras entre lo público, lo privado y lo íntimo. A esto se añade la estructuración de la economía digital que, con sus efectos de red, tiende a consolidar posiciones de dominio y abusos

de poder dominante por parte de los mayores conglomerados de cada aplicación o servicio. Las formas de socialización, acción política, intervención pública y participación comunitaria cambian a la par que las personas y los grupos sociales se apropian de modo diferenciado de las TIC.

El impacto de Internet en la convivencia democrática involucra procesos relativamente recientes, cuyos efectos en las relaciones sociales recién comienzan a ser identificados de modo fragmentario aún. Son procesos recientes porque la modalidad predominante de acceso a Internet de las más de 46 millones de personas que viven en la Argentina es a través del dispositivo móvil, y recién fue a partir de la licitación de espectro que habilitó la adopción de las comunicaciones móviles de cuarta generación (4G), en 2014, que comenzó a masificarse ese acceso a Internet, con la subsiguiente posibilidad de ver y descargar contenidos audiovisuales y no solo textos planos o audios y videos cortos.

A su vez, la aplicación más utilizada por las más de 55 millones de líneas móviles en actividad en el país es WhatsApp, es decir, un servicio de mensajería propiedad de Meta (Facebook e Instagram) que se halla bonificado por los operadores de comunicaciones móviles.

Como contrapunto, la universalización de los accesos móviles encuentra severas limitaciones por dos motivos: por un lado, por la cobertura de las redes, que en un país con la extensión geográfica de la Argentina castiga a quienes viven en localidades alejadas de los centros urbanos, puesto que los operadores privados raramente realizan inversiones donde no hay mercado. Para ello se precisa una política pública que compense los beneficios de contar con licencias para vender servicios en grandes ciudades con obligaciones de despliegue en áreas menos densamente pobladas.

Por otro lado, por la asequibilidad de los servicios, dado que la desigualdad socioeconómica incide directamente en el tipo de planes contratados y, así, el 89% de las líneas móviles activas son de modalidad prepaga. Esta depende de la carga de crédito de los usuarios y, consecuentemente, se trata de la opción más débil a la hora de garantizar conectividad de forma estable a lo largo del mes

para una persona. Su rutina de navegación, que incide en sus capacidades expresivas (emitir y recibir informaciones, opiniones, datos y otros contenidos), está directamente determinada por su capacidad económica para cargar crédito en el dispositivo móvil de comunicaciones.

En tanto, el acceso a Internet fijo a nivel nacional superaba el 76% de los hogares a fines de 2022, según los datos de los operadores que recopila el ENaCom. La mejora constante de la velocidad de bajada de esos accesos es importante, y más del 63% de las conexiones fijas superaban los 30 Mbps en aquel diciembre.

Estos datos expresan que el 24% de los hogares (un cuarto del total) no posee conexión fija y que, entre la mayoría que sí paga por conexión fija, un 37% recibe un servicio de menos de 30 Mbps. La agregación de hogares sin conexión y los que cuentan con accesos de baja velocidad da cuenta de un panorama de conectividad fija que dista de ser ideal.

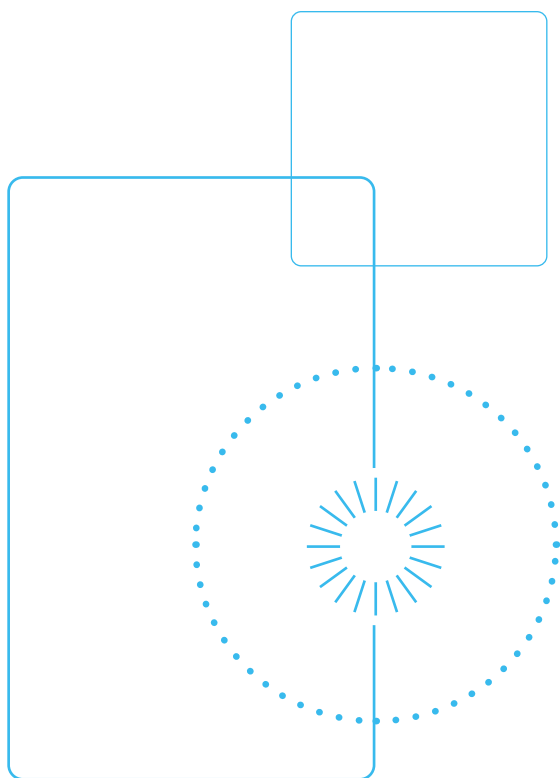
Los números mencionados resultan fundamentales para ponderar qué tipo de acceso tiene la mayoría de los habitantes del país a Internet y qué tipo de uso pueden hacer de las redes, sus servicios y aplicaciones. Son, también, necesarios para evaluar en qué sentido las brechas digitales han dejado de ser únicamente las que separan a conectados de desconectados, para aludir además a quienes sí tienen conexiones de red, aunque la calidad o velocidad de las mismas sea deficiente, o sus terminales de acceso sean inadecuadas para una navegación con posibilidad de utilizar distintos servicios y aplicaciones y, en consecuencia, vean restringido el potencial de aprovechamiento de los recursos digitales.

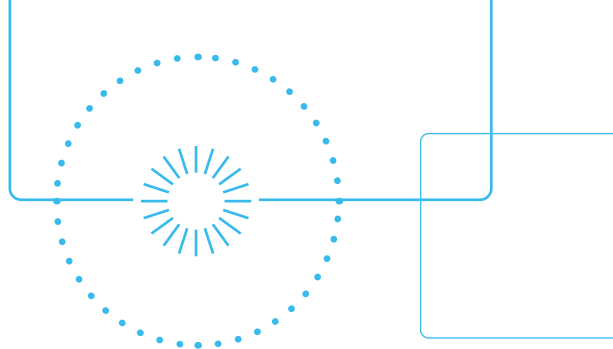
Las habilidades digitales y las oportunidades significativas de uso son mayores cuando las personas cuentan en su hogar con conexiones fijas robustas, toda vez que el uso del dispositivo móvil entorpece la realización de determinadas acciones, como la descarga y lectura de documentos largos necesarios para la contratación de servicios, el estudio y el trabajo en numerosas actividades. Por lo tanto, a las brechas materiales de acceso (quienes tienen o no conexión, quienes solo tienen conexión móvil y no fija en el

hogar, quienes poseen conexión móvil a través de la carga de crédito periódica sin abono con un operador de telecomunicaciones) se suman brechas de habilidades y oportunidades de uso que afectan las competencias y saberes, el acceso a servicios básicos, a la información y al desempeño laboral y productivo.

Expresarse, acceder a manifestaciones diversas del resto de la comunidad de pertenencia, ejercer la soberanía popular y definir los destinos son cualidades constitutivas de la democracia, pero en un ecosistema de comunicaciones donde el acceso de la ciudadanía a la información está condicionado fuertemente por brechas, esas cualidades resultan desigualmente distribuidas.

Los horizontes abiertos con la recuperación constitucional de 1983, que en los primeros años de la transición desde la dictadura parecían pletóricos de oportunidades, encuentran obstáculos materiales en la combinación entre los altos niveles de pobreza estructural de la sociedad argentina y su traducción en los recursos de comunicación imprescindibles para ejercitar no solo la examinación de los problemas actuales, sino el imaginario de un futuro que haga decible y posible la superación de las desigualdades.





Tecnología y participación política: los vaivenes de una promesa

Gabriel Vommaro

1. Presentación

Los inicios del actual ciclo democrático volvieron a traer una expansión del activismo político en general y de la militancia partidaria en particular. El optimismo de las ciencias sociales con el nuevo tiempo se expresó en la esperanza depositada en los nuevos movimientos sociales que organizaron parte de este activismo. En tanto, las grandes movilizaciones alfonsinistas, la vuelta del peronismo a las calles, la renovada política estudiantil en las universidades y escuelas secundarias daban cuenta de que los partidos volvían a ser, luego del ciclo autoritario, espacios atractivos para el involucramiento político. Pronto esto abarcó a todo el arco político: a peronistas y radicales se sumaron nuevos partidos como el Intransigente (PI) y el Movimiento al Socialismo (MAS), a la izquierda, y la Unión del Centro Democrático (UCeDé), a la derecha. El brazo estudiantil de esta última, la UPAU, fue el primer experimento exitoso de activismo juvenil de derecha, del que saldría una parte significativa de los cuadros del PRO, pero también del peronismo. Los partidos escenificaban esa capacidad de movilizar energías en grandes actos en estadios y plazas. Sin embargo, más pronto que

tarde a aquella primavera democrática le sucedió, con el final precipitado y fallido del ciclo alfonsinista, la crisis económica y el giro neoliberal del peronismo, el desencanto, cuyo punto cúlmine fue la apatía y el distanciamiento de la política institucional que tuvo lugar a partir de mediados de la década de 1990.

Algunos diagnósticos de la época atribuyeron a la “mediatización” de la política buena parte de la responsabilidad de este alejamiento del activismo. Para estos diagnósticos, el medio, en especial la televisión –cuya oferta por cable se masificó en la Argentina a partir de fines de la década de 1980–, había ahogado el mensaje con sus constreñimientos: espectacularización, frivolidad, primacía de la imagen, reducción del espacio para la argumentación... Otros análisis, más optimistas, veían en la televisión un vector de democratización, tanto por posibilitar la formación de una plaza pública masiva como por habilitar la expansión de interpretaciones sobre la vida en común, al articular como ningún otro medio la relación entre política y vida cotidiana. Desde entonces, la cuestión de la tecnología siempre estuvo en el centro de las indagaciones sobre la militancia. De hecho, coordenadas similares del debate volvieron a imponerse cuando, tiempo más tarde, la llegada de Internet trastocó tanto las mediaciones como las escenas de la vida política. Nuevamente, algunos subrayaban las potencialidades políticas de Internet para el florecimiento de la participación democrática: al reducir los costos de la coordinación y de la participación, la tecnología podía favorecer el activismo e igualar las posibilidades entre quienes poseían grandes recursos para financiar organizaciones y quienes no contaban con ellos. Frente a esta posición, otros argumentaron que Internet y las redes sociales eran terreno de manipulación de la información y los discursos de odio que hacían crecer la bronca y el desencanto con la política. Este texto no pretende zanjar ese debate, que da cuenta del rol ambiguo de la tecnología en relación a la participación política. En cambio, se propone repasar esa controversia para mostrar sus principales argumentos y sus modos de pensar la relación entre tecnología, participación y democracia.

2. La televisión: ¿ágora masiva o destructora de la vida política?

Tras los años de florecimiento de la relación entre los ciudadanos y la política, a partir de la década de 1990 se asiste a un tiempo de distanciamiento y apatía con los partidos y, en buena parte, con la política en general. El final precipitado y la mala performance económico-social del gobierno de Raúl Alfonsín, el giro neoliberal del peronismo en los años de Menem y la centralidad de la corrupción como problema público y encuadre crítico de la política institucional se encuentran entre los factores principales de esta crisis. José Nun (1991) escribió en esos años que la democracia dejó de ser un asunto del pueblo para ser percibida como el gobierno de los políticos. Se inicia así una “espiral de deslegitimación” que lleva a que la política deje de ser un lugar de imbricación y captura de energías políticas para volverse un espacio ajeno, extraño y hasta criticado por los legos. La crisis de la democracia es un tópico central de las ciencias sociales latinoamericanas, justo en el momento en que los regímenes democráticos parecían consolidarse en la mayoría de los países del continente. Aunque buena parte de los debates por estas tierras se hacían eco de las teorizaciones europeas sobre la posdemocracia, gobernada por criterios técnicos antes que ideológicos, cuando el “pensamiento único” parecía imponerse en el mundo occidental. Por aquí y por allá, el problema era la crisis del mundo público. Y en esas disputas, siempre, los medios audiovisuales ocuparon un lugar destacado. La extensión del espacio audiovisual, con temporalidades diferentes en el Norte y en el Sur del mundo, trastocó los modos de existencia de la vida política. La televisión –en especial los programas políticos multiplicados con la masificación del cable– se volvió locus de acontecimientos políticos, los ciudadanos parecieron quedar reducidos al lugar de espectadores, y las ideologías se encontraron confinadas a la lógica de la publicidad política. En ese contexto se sitúa el debate entre optimistas y pesimistas, o apocalípticos e integrados en los términos popularizados por Umberto Eco, quienes interpretaron esta transformación con sentidos opuestos.

En Europa, por caso, mientras Giovanni Sartori hablaba del *homo videns* como un tipo de ciudadano alejado de la política que vive en un mundo de opiniones teledirigidas, es decir de ignorancia política y manipulación mediática, Dominique Wolton celebraba la aparición de un nuevo espacio público mediático en el que los ciudadanos podían ser tenidos en cuenta a partir de su aparición en las mediciones de opinión pública.

El debate tuvo su versión argentina en el contrapunto entre Oscar Landi (1992), quien defendía una mirada positiva de los efectos de la televisión sobre la política, y Beatriz Sarlo (1992), quien al contrario enfatizaba los efectos negativos de la telepolítica, cuya velocidad en la narración de los hechos conspiraba contra la argumentación política. Landi estaba interesado en el modo en que la televisión lograba ensamblar elementos de la cultura de masas con la cultura popular para producir una narrativa política democrática, en el sentido de asequible para las ciudadanas y los ciudadanos con una relación distante con la política. Con un beneplácito similar observaba el formato del videoclip, que conectaba con la experiencia fragmentaria de sus contemporáneos. En definitiva, la televisión no era solo un hecho cultural irreversible, sino que también podía ser un espacio de dramatización del devenir político argentino abierto a la sociedad, incluso para los legos que viven la política con mayor ajenidad. Estos, a su vez, no podían ser vistos como receptores pasivos, sino que se valían de herramientas –entre las que Landi ubicaba al *zapping*– para elaborar los mensajes que recibían.

Al poco tiempo, Beatriz Sarlo publicó en la revista *Punto de Vista* una reseña crítica del libro de Landi. Para Sarlo, la televisión se basaba en una “idea abstracta de ritmo” que iba en contra de la narración y de la argumentación política. Asimismo, en consonancia con lo que afirmaba por entonces Pierre Bourdieu, la televisión representaba finalmente el triunfo de la lógica comercial por sobre cualquier otro principio de representación de la realidad. La televisión no solo trataba a los ciudadanos como audiencia, sino que también reforzaba su reducción al lugar de consumidores. En este contexto, la autora criticaba por su candidez las miradas que

encontraban potencia democrática donde ella veía una suerte de comida chatarra que contaminaba la deliberación política.

Aunque valoraban este hecho de maneras opuestas, optimistas y pesimistas admitían que la televisión había capturado buena parte de las escenas políticas. Y ciertamente la política institucional se volvió un hecho mediático. En un trabajo anterior (Vommaro, 2008) tratamos este fenómeno como la conformación de un espacio de la comunicación política del que el activismo y la acción colectiva estaban excluidos. Los efectos de este confinamiento de la política a las escenas mediáticas no tenían que llevar necesariamente a la apatía y la desafección. Llevaron, más bien, a un desencanche de las energías militantes de los partidos y la vida institucional, pero ese activismo comenzó a desplegarse en otros espacios. De hecho, años más tarde, en torno a los acontecimientos de diciembre de 2001, la movilización y el involucramiento políticos volverían a estar en el centro de la escena, y las energías ciudadanas volverían a volcarse a las calles y a las plazas, aunque a partir de formas más inorgánicas, menos institucionalizadas.

Poco después de que la ciudadanía desafiara este confinamiento de la política en los medios audiovisuales, otra innovación tecnológica trastocaría los términos de la relación entre ciudadanos y política: la llegada de Internet redistribuiría flujos y sentidos de la comunicación, y tendería a desplazar la vida pública de la televisión a las redes. Esta vez la innovación sería vista, por las miradas optimistas, como una vía de empoderamiento de los ciudadanos.

3. Las promesas políticas de las redes y sus críticos

Pocas innovaciones tecnológicas produjeron tanto optimismo político como la aparición de Internet. Para muchos observadores, la nueva tecnología volvía posible la utopía democrática de la comunicación horizontal y la participación en el espacio público con bajos costos. Además, la comunicación en redes reducía los costos de la acción colectiva y la movilización ciudadana “desde abajo”. El 15M

en Madrid, *Occupy Wall Street* o la Primavera Árabe funcionaron como confirmación de esta potencialidad democrática de Internet. En el caso argentino, la revolución tecnológica que supuso la comunicación digital, Internet y luego las redes sociales se produjo pocos años después del inicio del proceso de movilización política más intenso del actual ciclo democrático, que tuvo su punto de inflexión en torno a los acontecimientos de diciembre de 2001 y se prolongó por más de una década.¹ En los tiempos del florecimiento de la militancia social en organizaciones populares y de la militancia política en los movimientos que organizaron la salida de la crisis, entre los que destacaba el peronismo en su versión kirchnerista, el ideal democrático participativo parecía encontrar sus herramientas tecnológicas.

Sin embargo, poco más de una década más tarde, primero en el Norte global y luego en nuestro país y en América Latina, se encendieron algunas alarmas que terminaron por consolidar una mirada pesimista de Internet y las redes sociales cuando asistimos al ascenso de derechas autoritarias. La promesa democrática del espacio público había devenido en un mundo de individualidades recelosas de la vida pública, que vivían cada vez más encerradas en esferas de influencia pequeñas y homogéneas (las llamadas burbujas informativas), en las que la búsqueda de confirmación de las visiones del mundo compartidas por esos grupos (los fenómenos de cámara de eco) acrecentaba las miradas negativas sobre los otros, fragmentando aún más la posibilidad de un espacio democrático común y abriendo más espacio para discursos de odio y generación de fenómenos de pánico moral hacia el adversario político, las diversidades sexuales, los grupos raciales y étnicos subalternos. El ágora virtual era, en estas miradas pesimistas, un mundo dominado por la sobrevaloración del yo, la publicidad de la intimidad, las

1. Martín Becerra analiza el rápido crecimiento del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la Argentina, a inicios del siglo XXI, en “Accesos TIC 2000-2020 en Argentina ¿20 años no es nada?”. Disponible en <https://martinbecerra.wordpress.com/2021/06/16/accesos-tic-2000-2020-en-argentina-20-anos-no-es-nada/> [última consulta: 11 de mayo de 2023].

noticias falsas y la desinformación. Además, en las miradas pesimistas estos fenómenos habían fomentado la polarización política y reducido las posibilidades de entendimiento democrático entre grupos. También, como en el caso de los medios audiovisuales, la concentración de los mercados en pocas manos daba un poder sobre los flujos de información a algunos actores corporativos que, además, en este caso están situados en algunos países del Norte.

Como sucedió con la televisión, las evaluaciones sobre Internet y las redes sociales se dieron en un contexto de crisis de la democracia y de dificultad de los partidos tradicionales para conectar con los ciudadanos. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido con los medios audiovisuales, tanto para optimistas como para pesimistas Internet, y en especial las redes sociales, fueron vistas como una herramienta de movilización utilizada por un variopinto número de actores colectivos, desde movimientos sociales y activistas culturales hasta grupos racistas y de derecha radical, pero también habían permitido el surgimiento de un nuevo tipo de activismo, asociado a una nueva mediación entre la política y la sociedad, que son los *influencers*. Cuentapropistas del espacio público digital, los *influencers* se volvieron un signo de una época de crisis de las mediaciones institucionales. Desde publicistas de ideas conservadoras hasta promotores de causas sociales, estos actores centrales de la esfera pública digital comienzan a ser estudiados por las ciencias sociales. Nuestro estudio sobre *influencers* conservadores (Kessler, Vommaro y Paladino, 2022) muestra algunos rasgos centrales de estos actores: exigidos a encontrar, través del ensayo y error, un discurso que los distinga en el magma de la comunicación digital, trabajan para acumular seguidores a partir del impacto de sus intervenciones públicas, en especial en coyunturas críticas en las que expresan opiniones no vehiculizadas por los medios *mainstream*. Son así fuertemente dependientes del contexto, pero también de su habilidad para producir *engagement* de los usuarios. Y lejos de vivir solo de la actividad digital, suelen combinar hechos políticos *on line* con hechos políticos *off line*, como la presentación de libros, los actos con seguidores y las

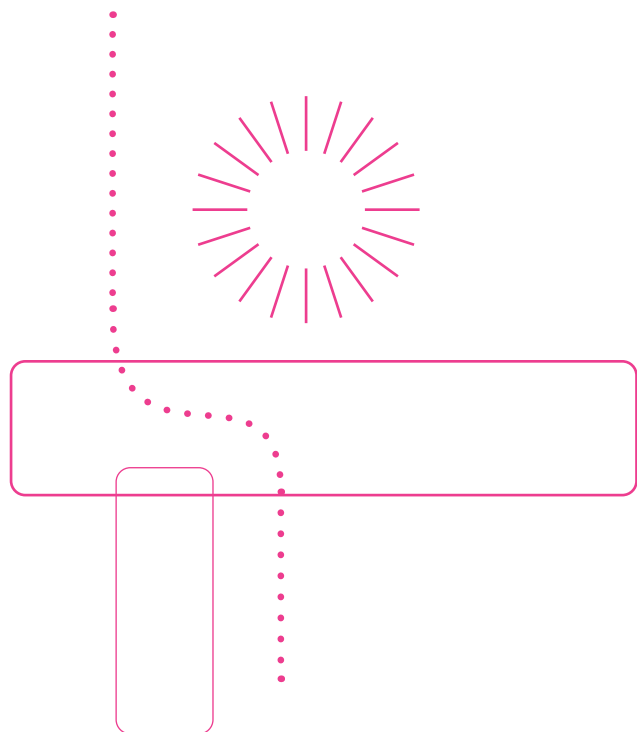
conferencias en las que promocionan sus ideas al tiempo que se promocionan como mediadores de su público. En algunas coyunturas participan de movimientos con expresión electoral, como los *influencers* brasileños que colaboraron con el ascenso de Bolsonaro, pero su secreto está en mantenerse al costado de la política institucional, en una relación de tensión con aquella, que se condensa en el *meme* como modo de representación de los acontecimientos y los personajes políticos convencionales. Su fuerte es así su plasticidad para conectar a los ciudadanos débilmente representados con la política institucional. Pero lo hacen de un modo irónico y crítico que tensiona el compromiso democrático mismo de esos actores.

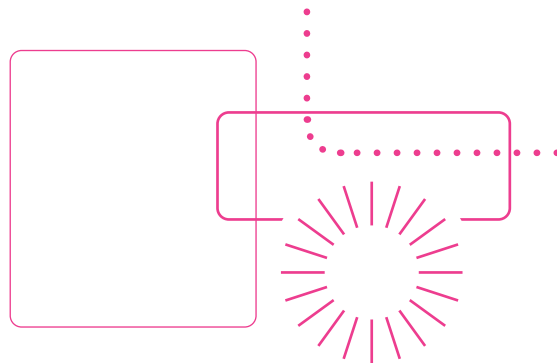
En estos 40 años de vida democrática hubo dos grandes revoluciones tecnológicas que impactaron en la vida pública. La transformación de la televisión, primero, Internet y las redes sociales, luego, trajeron amenazas tanto como promesas de extensión del espacio público y de favorecimiento del involucramiento político. Lo que está claro es que, si bien las tecnologías crean la ilusión del empoderamiento y la inclusión política, así como la amenaza de manipulación y destierro de la deliberación pública, la participación política tiende a reinventarse, tanto en sus versiones progresistas como en sus versiones conservadoras, desafiando al determinismo tecnológico, así como a una política institucional que tiene, de manera recurrente, grandes problemas para incorporar a sus ciudadanos a la deliberación sobre la vida en común. Probablemente haya que buscar ahí, y no solo en la tecnología, las causas de las crisis frecuentes de nuestra democracia.

Bibliografía

- Kessler, G., Vommaro, G. y Paladino, M. (2022). "Antipopulistas reaccionarios en el espacio público digital". *Estudios sociológicos*, 40(120): 651-691.
- Landi, O. (1992). *Devórame otra vez: ¿qué hizo la televisión con la gente? ¿qué hace la gente con la televisión?* Buenos Aires: Planeta.

- Nun, J. (1991). "La democracia y la modernización, treinta años después". *Desarrollo Económico*, 31(123): 375-393.
- Sarlo, B. (1992). "La teoría como chatarra. Tesis de Oscar Landi sobre la televisión". *Punto de Vista*, 44: 12-18.
- Vommaro, G. (2008). *Mejor que decir es mostrar: medios y política en la democracia argentina*. Los Polvorines: UNGS/Biblioteca Nacional.





Más innovación, más religión

Pablo Semán

Los 40 años de democracia han sido prolíficos en hechos que han transformado la situación de las religiones y la relación entre el Estado y las religiones en la Argentina. El cambio de régimen político y el hecho de que en ese contexto la sociedad legitimó el pluralismo se combinaron con los efectos cada vez más marcados de la incorporación de las nuevas tecnologías a la interacción social y determinaron además la multiplicación de las alternativas religiosas en contenido, organización e incluso formas de autoridad religiosa. Este conjunto de hechos ha redundado en la necesidad de entender la idea de religión de una manera más amplia que la tradicional que identificaba religión con catolicismo.

1.

En el plano de las instituciones religiosas sobresale un hecho que, a pesar de haber tenido contrapuntos a lo largo de los últimos 40 años, resulta nítido: la presencia legítima en el espacio público de grupos religiosos alternativos al catolicismo. No me refiero aquí a la pluralidad religiosa tradicional que incluía

en la noción de pluralidad legítima un conjunto que abarcaba el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo y el islam a título de “religiones serias”, “históricas” o “tradicionales”, al mismo tiempo que desconocía prácticas e identificaciones religiosas “menores” pero mucho más difundidas. Ese pluralismo formal tenía además la característica de jerarquizar entre sí a los mencionados grupos de ese conjunto. Las grandes religiones históricas presididas por el catolicismo como hermano mayor de una familia se jerarquizaban, a su vez, ante otros modos de creencia religiosa que aparecían como peligrosos, extravagantes o sectarios (la religiosidad popular, el pentecostalismo, las expresiones de la nueva era, entre otras formas de religiosidad). Nos referimos al hecho de que, por ejemplo, los pentecostales o las expresiones de la nueva era resultan cada vez menos estigmatizados aunque siempre perdure algo de esa actitud. Otras tradiciones religiosas, como las vinculadas a la experiencia afro, esperan todavía un mejor trato por parte de los medios de comunicación y de las instituciones; es esa una especie de mancha para el pluralismo, que de todas maneras es mayor que el que vivíamos a inicios de la década de 1980. El pluralismo religioso que siempre existió de hecho se volvió, de forma creciente, un derecho que todavía no es ni de pleno ejercicio ni de plena sanción.

2.

Paralelamente, en el plano de las relaciones institucionalizadas entre el Estado y los grupos religiosos ha habido una transformación importante: los privilegios que tenía el catolicismo frente al Estado argentino han cedido en algún grado. Ya no es necesario ser católico para ser presidente de la Nación, ni son los católicos los únicos interlocutores del Estado para ciertos temas. Un claro ejemplo de esto es el reconocimiento que obtienen las iglesias evangélicas en su trabajo con los sectores populares. Puede decirse que a la normativización del pluralismo se ha añadido la ampliación de las

capacidades de reconocimiento del Estado ante esa pluralidad y la reversión, parcial, de la identificación del Estado con el catolicismo. No es menos cierto que en el marco de la democracia han sucedido hechos gravísimos en los que se ha atentado contra entidades judías y persisten expresiones de antisemitismo frente a las cuales no cabe bajar ninguna guardia. En otro plano, tampoco debe olvidarse que nuestra sociedad mantiene todavía núcleos bastante irreductibles de intolerancia a la diversidad religiosa, tanto entre practicantes y dirigentes de unas religiones que estigmatizan a otras, como entre partidarios de un concepto de secularización y laicidad tan ideal y tan radical que no tiene ninguna expresión histórica real, y en nombre del cual combaten a las religiones a veces de forma general, a veces de forma selectiva.

3.

En este contexto en que se producen movimientos de pluralización y de legitimación del pluralismo y una renegociación general de las relaciones entre Estado y religiones es preciso encarar los efectos de las nuevas tecnologías en las dinámicas de la vida religiosa en la sociedad argentina.

Un primer efecto de la presencia de estas tecnologías y de su creciente disponibilidad a nivel individual y en modo interactivo ha sido un cambio cuya significación histórica solo puede ser comparada con los efectos de la introducción de la imprenta en el nacimiento del protestantismo en el siglo XVI o con la irrupción de los medios de comunicación masiva en el siglo XX. Los tres fenómenos determinaron un incremento en la circulación, producción y consumo de ideas religiosas y, junto con ello, una democratización de la vida religiosa. También veremos que esto tiene el efecto de obligar a redefinir la categoría religión.

Un segundo efecto ha sido la activación de sujetos en el campo religioso virtual. La radio y la televisión permitían la circulación de las ideas entre un emisor potente y legítimo y un público

masivo y relativamente pasivo, aunque nunca tanto como lo imaginan quienes suponen que los medios inyectan contenidos en un cuerpo inerte. Las nuevas tecnologías, la disponibilidad de estas para cualquier tipo de emisor y la interactividad hicieron de un público creciente un conjunto de sujetos notablemente activos en el consumo, difusión y producción de ideas y experiencias religiosas. Pero es necesario entender que las mediaciones de nuevo tipo no necesariamente excluyeron las anteriores. Como resalta José Luis Fernández, las nuevas tecnologías activan circuitos de reaprovechamiento y resonancia de la comunicación masiva y de la mediación del libro: desde una cuenta de Instagram se pueden recomendar videos de YouTube que remiten a un programa radial o televisivo que se sostienen en la lectura de un determinado autor. Y desde este conjunto de propuestas pueden promoverse actitudes, ejercicios físicos o espirituales y nociones que le dan sentido a esas prácticas.

En este contexto, hay un tercer efecto: la actividad de los creyentes adquiere características que le dan un contenido específico a las ideas de democratización y pluralización religiosa: la autonomía. De la misma manera que ocurre en política o en asuntos que antes estaban circunscriptos al ámbito educativo y sus jerarquías, la autoridad se debilita y la autoridad de los creyentes se refuerza. Todos tienen siempre la posibilidad de tener otra versión que la que provee la autoridad oficial. Al pastor, al sacerdote, al líder espiritual que un sujeto sigue en la vida presencial le aparecen competidores virtuales que tienen un libro, una cuenta de Twitter, Instagram o Facebook desde las cuales proponen nociones alternativas a las de la autoridad religiosa tradicional. Lo que ya ocurría en la relación entre vida religiosa y mundo editorial, entre vida religiosa y liberación del campo religioso de las barreras legales y paralegales autoritarias se intensifica con la disponibilidad de contenidos e interlocuciones que genera la virtualidad. De la misma manera que en la música surgieron los consumidores omnívoros que construyeron selecciones de escucha propias, en la articulación de las experiencias

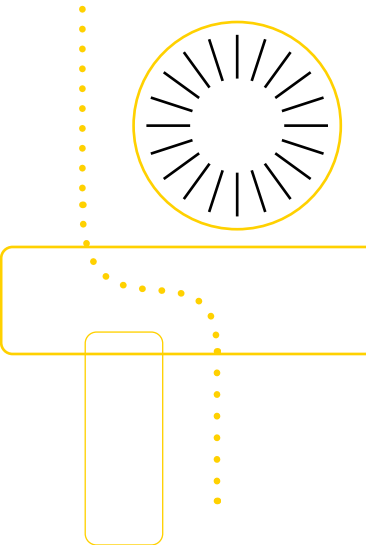
religiosas surgen formas singulares de acoger y compatibilizar las más variadas influencias.

Por esta vía llegamos a un cuarto efecto: las experiencias religiosas se individualizan, o se acotan a grupalidades de nuevo tipo. No se trata del reino de la individualización absoluta y el capricho pero la institucionalidad religiosa se transforma: a las instituciones preexistentes, que no necesariamente dejan de tener vigencia, se agrega una capa de grupos de nuevo tipo que sin duda son más lábiles y más dinámicos. Grupos que no por esta circunstancia dejan de reintroducir al circuito de creencias una producción que, a través de un trabajo subterráneo, incide en las “grandes religiones establecidas”.

Como suele decirse de forma errada, en pleno siglo XXI proliferan las religiones y hay religiones “cada vez más raras”. Pero esta impresión es clara para el sentido común de los observadores, que en general no son muy religiosos, por la siguiente razón: lo que se conoce como secularización, como proceso de separación de lo religioso y lo público, como agotamiento progresivo e irreversible del contenido encantado de las religiones, y que fue propuesto por las ciencias sociales como el destino inevitable de la religión en la modernidad, no ocurrió. La premisa subyacente a la profecía incumplida es que la modernidad traza un muro infranqueable entre la religión y el resto de los dominios de la vida (la política, la economía, el derecho, la psicología, etc.). La realidad alternativa a esa premisa es que todas las tentativas de establecer ese muro acarrearón la mutación y la proliferación de nuevas formas de religión. En ninguna de sus fases –impresión, medios masivos de comunicación, digitalización– la modernidad agota la religión, sino que modifica su forma de constitución y aparición.

Algunos se preguntarán si esos circuitos y esos productos son religiosos. Si se les respondiese que sí dirán que eso es estirar el concepto de religión. Justamente: uno de los efectos de las prácticas digitales ha sido hacer visible la actividad de los sujetos en la configuración de las religiones y subrayar que cuando estas son entendidas a partir de la práctica y no de una ideología religiosa

determinada, la idea de religión abarca muchas más realidades que las de una iglesia, un sacerdote, una biblia. Esa es la definición de la religión basada en una lectura de la experiencia católica. Una religión implica sencillamente un juego entre humanos, situaciones, cosas y seres con otras capacidades que las de los humanos.



Educación y tecnologías en la Argentina democrática

La inclusión, entre las tensiones persistentes y las emergentes

Mariana Maggio

Presentación

La recuperación de la democracia en la Argentina inaugura un ciclo de construcción de conocimiento crítico sobre las prácticas de la enseñanza y los procesos de aprendizaje como objetos de estudio. No se trata solo de la decisión fundamental de abordar estos temas centrales para la educación desde los trabajos de investigación que empiezan a realizarse de modo sistemático, especialmente en el seno de las universidades nacionales, sino de deconstruir los abordajes previos, propios de la racionalidad técnica, apoyados en el conductismo y la teoría de sistemas. En el campo de la tecnología educativa esto implica una revisión que permite desarrollar los fundamentos epistemológicos y metodológicos para abordar el análisis de las prácticas educativas entramadas con tecnologías en los despliegues de las décadas sucesivas hasta llegar a hoy. Nos enfocaremos en el reconocimiento de algunos de los momentos que resultan claves en estos 40 años de democracia y en algunas de las categorías conceptuales que permiten interpretar sus sentidos, especialmente a partir de la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación. También

presentaremos algunas hipótesis sobre las tendencias actuales y los fenómenos emergentes.

Los esfuerzos iniciales

En los primeros años de democracia se realizan esfuerzos de dotación de equipamiento llevados adelante, en general, por las instituciones y sus comunidades. Son muchas las escuelas en las que aún encontramos equipos de audio, proyectores y televisores adquiridos en esa época. Recién hacia mediados de la década de 1990 empieza a consolidarse en la Argentina el modelo de laboratorio de computación como forma de incorporación de equipamiento informático en las instituciones educativas, llevado adelante a través de iniciativas, no siempre articuladas, del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las instituciones y las propias comunidades. Esto resulta en un “mapa heterogéneo en el que la dotación de equipamiento no configuró parte de un plan estructurado ni estuvo sostenida por una visión acerca de su sentido pedagógico” (Maggio, 2012: 52).

La irrupción de Internet en la escena educativa configura un hito fundamental. En las universidades empieza a generalizarse el acceso hacia finales de la década de 1990, con la provisión de servicios de correo electrónico a los docentes en sus hogares y la instalación de laboratorios conectados. En la década de 2000 se suma la puesta a disposición de plataformas virtuales, que emerge para sostener la modalidad a distancia, pero rápidamente se empiezan a ofrecer también para el enriquecimiento de las clases presenciales, aunque sin niveles de adopción significativos. En el ámbito de la escolaridad básica se destaca la creación en el año 2000 del portal educativo nacional educ.ar, con foco en el desarrollo de contenidos digitales, cuya continuidad se ratifica en el año 2003 con un enfoque distinto, centrado en la participación a través de blogs como tendencia cultural del momento.

En estos movimientos empieza a resultar evidente que a la hora de educar ya no es lo mismo contar con un dispositivo conectado

a Internet que no hacerlo, preocupación que empieza a atravesar todos los niveles del sistema educativo e interpela tanto a las políticas como a las instituciones que empiezan a registrar con preocupación la necesidad de prepararse para la era de la información (Castells, 1999).

La inclusión como camino y la expulsión como contracara

La escena cambia de modo rotundo cuando, hacia mediados de la década de 2000,¹ desde las políticas de la región se empieza a reconocer que, en un mundo distinto con todas sus actividades centrales atravesadas por las tecnologías de la información, la inclusión digital se configura como un derecho asociado al derecho fundamental a la educación. Para el programa Conectar Igualdad, lanzado en 2010, ese es su objetivo privilegiado:

Promover la igualdad de oportunidades a todos los jóvenes del país proporcionando un instrumento que permitirá achicar la brecha digital, además de incorporar y comprometer a las familias para que participen activamente (Maggio, 2012: 54).

El programa se propone alcanzar todas las escuelas secundarias, especiales y los institutos de formación docente de gestión estatal y alienta el desarrollo de otros programas provinciales que se enfocaron en el nivel primario.

En los estudios realizados en este período (Maggio, 2016) identificamos una inclusión de doble carácter. Por un lado, un carácter vinculado a un derecho que es necesario reconocer y garantizar: no es lo mismo estar incluido digitalmente a la hora de educarse que no estarlo si ello supone el acceso a los bienes culturales, a tendencias emergentes y a formas de participación

1. Visión estimulada por Nicholas Negroponte y el lanzamiento de su programa One Laptop Per Child en 2005.

política, social y cultural que se van complejizando. Por otro lado, un carácter epistemológico que se conforma desde el momento en que las tecnologías de la información y la comunicación empiezan a atravesar las formas en que se construye el conocimiento disciplinar. A partir de este carácter las tecnologías ya no entran en el aula por moda buscando una presunta aura de modernidad sino porque algunos docentes empiezan a reconocer los atravesamientos de las tecnologías en la sociedad y el conocimiento y, con este sentido genuino, las incorporan en sus prácticas. Esto supone superar las visiones instrumentales centradas en las herramientas como algo que se puede poner o sacar, para plantear otras de orden cultural y epistemológico en las que, junto con la necesaria formación didáctica, las tecnologías emergentes se integran en las prácticas de la enseñanza en un rediseño que pone en tensión los rasgos clásicos persistentes y hace que sucedan en clase experiencias relevantes y propias del tiempo en el que tienen lugar.

La contracara de esta inclusión de doble carácter es la expulsión (Sassen, 2015). Docentes entrevistados en nuestras investigaciones señalan que un dispositivo conectado es el acceso a la literatura en un hogar sin bibliotecas, la posibilidad de armar un curriculum vitae para conseguir un trabajo y la oportunidad de comprender las formas contemporáneas de conocimiento. En palabras de una profesora de escuela secundaria:

Como sociedad, como docentes, creo que tenemos la responsabilidad de restituir derechos. Tomamos conciencia de que tenemos que gestionar quizá la única oportunidad que tienen estos chicos para poder mirar la vida de otra manera (profesora de metodología de la investigación, provincia de Mendoza, año 2011).

Más allá de los enormes esfuerzos realizados, las iniciativas no logran llegar a todos los estudiantes del sistema educativo. Hacia el año 2015, y con los cambios en el gobierno nacional, las entregas masivas de computadoras empiezan a suspenderse. La creciente expansión de telefonía celular inteligente en el mercado de consu-

mo no alcanza para penetrar las zonas rurales ni los sectores más vulnerables y hacia finales de la década de 2020 se registran deudas tanto desde el punto de vista de la conectividad a Internet de calidad como desde el acceso a dispositivos, en las aulas y en los hogares de docentes y estudiantes.²

Tiempos de mutación y experiencias alteradas

En su libro *The Game* Alessandro Baricco analiza retrospectivamente las décadas hasta aquí brevemente reseñadas y concluye que aquello que se estaba produciendo era una revolución mental. Mientras las políticas y las iniciativas mencionadas tienen lugar, nuestras subjetividades empiezan a encarnarse en una realidad diferente, física y virtual al mismo tiempo (Baricco, 2019: 92). El mismo autor señala que a los docentes nos cuesta entender el cambio de juego que, con los teléfonos celulares en la mano, nos depositó físicamente en las redes sociales (:142). Esa es la tendencia de la que los estudiantes incluidos digitalmente empiezan a participar de modo intenso en sus vidas cotidianas mientras las aulas comienzan a lucir lentas y grises.

Así están las cosas cuando nos sorprende la pandemia por COVID-19. El cierre abrupto de los edificios de las instituciones educativas de todos los niveles en marzo de 2020 en el marco de las decisiones de aislamiento y distanciamiento social preventivo obligatorio genera una conmoción (Maggio, 2020). La imposibilidad de acceder a los espacios físicos es acompañada por la decisión política de seguir educando. Desde las políticas, las instituciones y las prácticas docentes se realizan enormes esfuerzos por sostener a los estudiantes en el sistema. El conjunto de la comunidad abraza las alternativas tecnológicas a disposición, que dejan expuestas,

2. Según el informe de acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación de la Encuesta Permanente de Hogares, “en el cuarto trimestre de 2019 se registró que el 60,9% de los hogares urbanos tiene acceso a computadora y el 82,9%, a Internet. Además, los datos muestran que, en la Argentina, 84 de cada 100 personas emplean teléfono celular y 80 de cada 100 utilizan Internet” (pág. 3).

entre otras cuestiones, las deudas en materia de inclusión digital, y obligan a llegar con propuestas en materiales impresos, radio y televisión. Para los incluidos digitalmente todo resulta un poco más sencillo dentro de una enorme complejidad vital. Para quienes no lo están, implica quedar afuera del sistema educativo.³

La mutación (Berardi, 2020) de la pandemia muestra la profundización de las tendencias culturales que giran en torno de lo viral (Carrión, 2020). En el plano de las prácticas de la enseñanza se produce una serie de interesantes alteraciones (Maggio, 2021) en algunas de las dimensiones que más marcadamente estructuran la experiencia educativa. Se altera el espacio, cuando de un momento a otro se empieza a enseñar fuera de las aulas físicas; el tiempo, que se diluye en ausencia de las marcas que le imprimen su despliegue en los edificios; y la currícula, con acuerdos importantes en todos los niveles educativos sobre la necesidad de priorizarlo. Finalmente, queda claro que es necesario revisar las propuestas de evaluación, ante la dilución de las formas habituales de implementarlas marcadas por un control cercano que en la virtualidad resulta prácticamente inviable. Por las razones menos pensadas se dan condiciones excepcionales para que la revolución mental de la cultura sea abrazada en una suerte de reinención de la enseñanza. Sin embargo, esa revolución pedagógica ahora favorecida por el contexto no necesariamente ocurre. En un primer lugar el énfasis de las propuestas pedagógicas se centra en la puesta a disposición. “Subir”, “publicar”, “enviar” y “compartir” son las palabras más usadas para referirse a la entrega de explicaciones, actividades, ejercicios, tareas y evaluaciones, en distintos formatos. Se trata de llegar al estudiantado para que tenga una propuesta en la mano. Más adelante, cuando las condiciones de acceso a la tecnología lo permiten, el foco se ubica en los encuentros sincrónicos,

3. De acuerdo con la Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia por COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana publicada por UNICEF en febrero de 2022, “los hogares en los cuales las y los estudiantes no cuentan con computadora para realizar tareas escolares y conectividad a Internet domiciliaria reportaron situaciones de abandono en mayor medida (5%)” (pág. 57).

que emulan la clase en el espacio del aula física. Otro esfuerzo loable que, sin embargo, gira en torno de la explicación docente cooptando el mayor tiempo de la escena. Un modelo que –lo sabíamos antes de que la pandemia empezara– teníamos que desarmar.

Quedan dos fuerzas montadas y operando en el retorno a la presencialidad, parcial en 2021 y plena en 2022. La primera es la fuerza que desarrolla la docencia para actuar colectivamente en el medio de la crisis, creando propuestas inéditas de enseñanza en colaboración en los entornos virtuales que, finalmente, se adoptan de modo masivo. La segunda es la conciencia que desarrollan los estudiantes acerca de que la enseñanza ya no tiene que ser lo que era antes de la pandemia y su reivindicación del derecho a tener propuestas de enseñanza alternativas y no solo presenciales, que se hace oír con mucha fuerza, especialmente en los niveles superiores del sistema educativo. Lo híbrido emerge con una potencia arrolladora para convertirse, tal vez, en el salto hacia adelante que estamos necesitando para abrazar, por fin, unas prácticas más contemporáneas, propias de los tiempos de mutación que atravesamos y que, por eso mismo, resulten mucho más inclusivas.

Extracción y después. Lo artificial y lo humano

Como no podía de ser de otra manera, las últimas décadas marcan también la expansión de los campos disciplinares en el ámbito de las ciencias de la computación. A escala global se instala la preocupación por la inclusión de estos saberes en la currícula de todos los niveles. En el nivel superior se renuevan los planes de estudio y se crean numerosas carreras; en la educación básica se generan algunos movimientos tendientes a la inclusión de los denominados contenidos STEM y la presión para que sean abordajes en materias específicas,⁴ lo cual aliviaría, entre otras cuestiones, la brecha de género.

4. En la Argentina se destacan las reivindicaciones de ADICRA y los esfuerzos programáticos de la Fundación Sadosky.

En los primeros meses de 2023, mientras se transita una suerte de alivio pospandemia, se encienden las alarmas de lo que puede llegar a ser un nuevo hito o, quizás, hasta un cambio de época, con los desarrollos de OpenAI⁵ y, especialmente, la estrella del momento, el chatGPT.⁶ Esta interfaz, de la que apresuradamente podríamos decir que está al alcance de todos aunque sabemos que esto no es así porque no todos tienen dispositivos conectados, se expande a una velocidad inusitada y termina de poner en cuestión los resabios clásicos –explicativos, aplicativos y verificativos– de la enseñanza que siguen sobreviviendo, incluso más allá de los embates de la pandemia. Mientras las autoridades educativas y docentes miran el asunto con cierta incredulidad e inocencia, muchos estudiantes advierten que gran parte de lo que en sus clases se les solicita como prueba de aprendizaje el chatGPT lo resuelve. A la resistencia se le acaba el tiempo.

¿Qué hay detrás de estos desarrollos de inteligencia artificial que empiezan a quitarnos el sueño y tal vez constituyan una clave importante para proyectar las próximas décadas de vida democrática? En días de debate y experimentación se desataca el análisis de Kate Crawford, quien sostiene que

la inteligencia artificial (AI) no es *artificial* ni *inteligente*. Más bien existe de manera corpórea, como algo material, hecho de recursos naturales, combustible, mano de obra, infraestructuras, logística, historias y clasificaciones. Los sistemas de AI no son autónomos, racionales ni capaces de discernir algo sin un entrenamiento extenso y computacionalmente intensivo, con enormes conjuntos de datos o reglas y recompensas predefinidas. De hecho, la AI como la conocemos depende por completo de un conjunto mucho más vasto de estructuras políticas y sociales. Y, debido al capital que se necesita para construir AI a gran escala y las maneras de ver que optimiza, los sistemas de AI son, al fin y al cabo, diseñados

5. Véase <https://openai.com/>.

6. Véase <https://chat.openai.com/>.

para servir intereses dominantes ya existentes. En ese sentido, la AI es un certificado de poder (Crawford, 2022: 29).

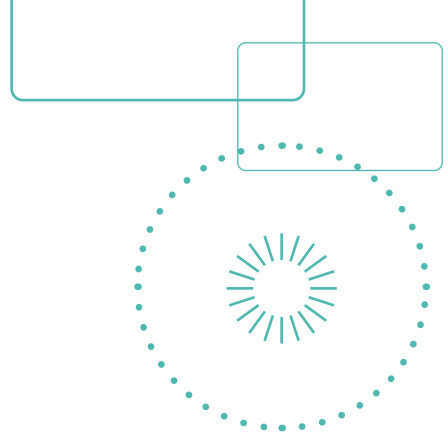
Mientras terminamos de comprender los efectos expulsivos que conllevan las deudas en materia de inclusión digital empieza a correr el tiempo de descuento de un juego distinto centrado en la extracción, primero de minerales y, luego, de datos (Crawford, 2022). ¿Cuáles son las preguntas que necesitamos hacernos para definir las políticas y las prácticas que sostengan y profundicen la democracia en los próximos 40 años y más en un mundo en el que las reglas están cambiando aceleradamente? ¿Qué esfuerzos tenemos que hacer en materia de educación en un contexto en el que apenas estamos empezando a comprender los rasgos –y los sesgos– de los desarrollos tecnológicos emergentes? ¿Cómo terminar de despojar las prácticas educativas de la nostalgia para pegar un salto que nos permita defender el sentido de lo humano frente a lo artificial?

Lo construido en estas cuatro décadas sienta las bases para nutrir un proyecto político educativo consistente, no contingente, en el que cada estudiante esté incluido digitalmente; sea integrado al sistema escolar a través de propuestas alternativas en atención de su contexto, garantizando el derecho a la finalización de todos los niveles educativos, incluso el superior; y comprenda de modo crítico un mundo cuya transformación se acelera, siendo parte de una experiencia pedagógica contemporánea que le permita construir colectivamente un horizonte de humanidad y esperanza.

Bibliografía

- Baricco, A. (2019). *The Game*. Buenos Aires: Anagrama.
- Berardi, F. (2020). *El umbral*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Carrión, J. (2020). *Lo viral*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Castells, M. (1999). *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*. México D.F.: Siglo XXI editores.

- Crawford, K. (2022). *Atlas de inteligencia artificial: poder, política y costos planetarios*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Maggio, M. (2021). *Educación en pandemia*. Buenos Aires: Paidós.
- (2020). Las prácticas de la enseñanza universitarias en la pandemia: de la conmoción a la mutación. *Campus Virtuales*, 9(2), 113-122.
- (2016). Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas de la enseñanza. *Hacia una tecnología educativa re-concebida*. Tesis doctoral. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
- (2012). Entre la inclusión digital y la recreación de la enseñanza: el modelo 1 a 1 en Argentina. En revista *Campus Virtuales*. Monográfico “Las políticas iberoamericanas TIC para la Escuela. Miradas desde las dos orillas”.
- Sassen, S. (2015). *Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global*. Buenos Aires: Katz Editores.



Cuatro tesis sobre información y democracia en la convergencia digital

Esteban Zunino

Las descodificaciones variadas en las lecturas de televidentes se amplían hoy con las pequeñas pantallas interactivas, los memes sarcásticos junto a las noticias que da un medio y las oportunidades de confrontarlas con otros. Sin embargo, ser espectadores activos o usuarios prosumidores no es sinónimo de ser ciudadanos.

(GARCÍA CANCLINI, 2019: 45)

La información es un insumo central para el ejercicio de la democracia. Las dietas informativas han mutado producto de nuevas formas de producción y consumo asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las transformaciones se inscriben en una infraestructura infocomunicacional cuya omisión en el análisis suele decantar en cierto determinismo tecnológico, tanto para su apología democratizadora, cuanto para su demonización. La problemática requiere una caracterización de los procesos sociales que condicionan las prácticas de los sujetos desde una mirada estructural, capaz de explicar los flujos informativos y su relación con la calidad democrática. Con ese fin se proponen

cuatro tesis sobre la relación entre información y democracia en la convergencia digital.

1. Los flujos informativos deben ser analizados en el contexto de la economía digital

Resulta imprescindible inscribir la relación entre información y democracia en un entorno infocomunicacional que ha sufrido cambios estructurales asociados a la irrupción de la economía digital. Se yergue un nuevo modelo dominante de reproducción del capital que hace un uso intensivo de la digitalización y que coloca a las empresas tecnológicas globales entre las de mayor facturación y desempeño bursátil, hecho que no es inocuo para los flujos informativos.

El entorno convergente en el que se desenvuelven nuestras vidas se caracteriza por un dominio estructural de un puñado de empresas tecnológicas globales. Apple, Microsoft, Alphabet (Google + YouTube) y Amazon ocupan los primeros cuatro lugares del índice Dow Jones, mientras que Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) se posiciona entre las primeras 15 empresas de mayor cotización (Statista, 2023). Además, las cinco corporaciones controlan los datos de más de la mitad de la población mundial, con amplio dominio en Occidente (Zuazo, 2018).

La participación cada vez más importante de las redes sociodigitales y los agregadores de noticias en la cotidianidad de los consumos informativos relegan la centralidad de las industrias culturales clásicas, a la vez que las transforman y adaptan los patrones del nuevo ecosistema. Por lo tanto, un primer paso para el análisis consiste en “ubicar a las compañías tecnológicas en el ámbito de las industrias culturales y creativas” (Miguel de Bustos e Izquierdo Castillo, 2019: 817), puesto que intervienen en la distribución y monetización de los contenidos informativos.

Esa ubicación conceptual reclama no perder de vista su doble dimensión económica y simbólica. Es decir, se trata de un tipo particular de industrias que, a la vez que tienen como fin la reproducción

del capital vía monetización de contenidos, intervienen en el proceso de disputa y reproducción de sentidos. La información circula en un entorno que tiene como características: 1) una competencia ecosistémica en el que cada uno de los jugadores centrales ofrece productos que involucran infraestructura, transacciones comerciales y contenidos mediáticos; 2) una concentración con crecimiento expansivo; 3) capitalización bursátil sobre la base de activos especulativos; 4) fuerte necesidad de inversión tecnológica; 5) uso de los datos y contenidos de los usuarios; y 6) un sustrato ideológico que se posa sobre valores neoliberales (Miguel de Bustos e Izquierdo Castillo, 2019; Zuazo, 2018). En ese ambiente deslocalizado y concentrado operan las viejas industrias culturales, partícipes de un proceso de convergencia que se da en dos planos. Uno que supone la integración de contenidos y consumos en múltiples pantallas, y otro concomitante que consiste en la integración de capitales especulativos, de empresas de telecomunicaciones e Internet en las industrias infocomunicacionales (Becerra, 2015). Así, la información circula en un modelo de re-intermediación moldeado por agentes globales que ostentan posiciones dominantes.

2. Los usos condicionan la oferta informativa

El proceso de digitalización multiplicó exponencialmente la disponibilidad de información a través de innumerables medios y plataformas complementarios, al punto que uno de los rasgos distintivos del entorno digital es la abundancia (Boczkowski, 2022). El ecosistema en el que se insertan las prácticas informativas es híbrido, producto de la imposibilidad de delimitar las experiencias *on line* de las *off line*, por lo que la dieta informativa actual se nutre de insumos mediatizados combinados con procesos de comunicación desintermediada (Casero-Ripollés, 2020).

La falta de interés en las noticias es otro rasgo de la época, que se suma a la desconfianza en los medios manifestada por seis de cada diez argentinos (Newman et al., 2022). Los consumos informativos

mixturan una decreciente búsqueda activa con un proceso ambiental y derivativo (Boczkowski, 2022) en el que los contenidos suelen encontrar a los ciudadanos mientras hacen otras actividades, principalmente recreativas. En tanto, el desacople entre emisión y recepción y la segmentación de las audiencias marca un quiebre con la era *mainstream* (Gil de Zúñiga et al., 2017).

Ahora bien, un ecosistema de medios conectivos dominado por un puñado de corporaciones globales que intervienen en los flujos informativos a través de una programación algorítmica opaca genera efectos controversiales para la democracia (García Canclini, 2019). El proceso de concentración sin precedentes puso en jaque a los modelos de negocio de los medios. Si bien el desarrollo tecnológico los obligó a diversificar sus fuentes de financiamiento –proponiendo modelos gratuitos para el usuario que se financian con venta de publicidad, por suscripción, híbridos, y *crowdfunding*–, la actualidad es de crisis, precarización y redefinición de roles y rutinas productivas en la industria de la información.

En tanto, la cuantificación posibilitada por la digitalización abrió la puerta al análisis de métricas como nuevo faro de la producción informativa. En la actualidad, las redacciones han diversificado los perfiles de sus plantillas, planteándose una división transversal a distintos tipos de medios. Mientras que un grupo de periodistas construye la agenda sobre la base de los criterios de noticiabilidad basados en el interés público y la información socialmente relevante, una porción cada vez mayor de profesionales se dedica a la construcción de contenidos virales, con escasa relación con la relevancia social, pero con amplio poder de penetración. Así, el uso de métricas se volvió rutinario en la definición del temario, los estilos y encuadres mediáticos. Ello redundó en la venta de títulos que poco tienen que ver con el desarrollo de las notas y en una baja en la calidad informativa (Retegui, 2020), a la vez que las piezas más consumidas no necesariamente se relacionan con la importancia de los temas (Fürst, 2020).

De este modo, una noticia viral producida para indexar en Google Discover mediante técnicas de Search Engine Optimization (SEO)

puede generar hasta diez veces los ingresos que produce una nota de portada, con firma, sobre un asunto público. Así, la construcción de la agenda mediática se ve fuertemente tensionada por factores exógenos relacionados con la generación de ingresos.

3. Los entornos híbridos limitan el pluralismo y la calidad informativa

La combinación de digitalización y abundancia instituyen ambientes de alta elección. Sus rasgos centrales son un declive relativo en el suministro de información política en comparación con noticias blandas, baja en la calidad informativa que se desprende de la crisis de los modelos de negocio, incremento en la concentración mediática, crecientes procesos de fragmentación y polarización política, supremacía de la opinión respecto de las evidencias y un afianzamiento de sociedades cada vez más inequitativas respecto del acceso y consumo de información (Van Aelst *et al.*, 2017).

El concepto de pluralidad incluye los factores que deben ser fomentados para que una sociedad sea democrática, y se basa en la diversidad. El pluralismo, en tanto, remite a una dimensión normativa relacionada con el sistema de medios. Se supone que es condición de las sociedades democráticas tener un sistema de medios plural en relación con tres dimensiones. La primera es económica y expresa la necesidad de la existencia de una importante cantidad de medios financiados por diferentes vías y que abarquen distintos tipos de gestión. La segunda dimensión hace referencia a la regulación, e instituye al Estado como el agente capaz de mantener el equilibrio del sistema. La última se enfoca en los contenidos, de los que se espera diversidad interna, es decir, presencia de múltiples voces y encuadres dentro del mismo medio, y diversidad externa, orientada a que el sistema en su conjunto exponga una variedad razonable de productos informativos y puntos de vista (Miguel de Bustos e Izquierdo Castillo, 2019) suficientes para asegurar la deliberación pública (Habermas, 2006).

Con redes y plataformas concentradas que acaparan los contenidos y la facturación global de la información en el marco de la economía digital, hoy son los medios de circulación –y no los de producción– los que orientan los flujos informativos a partir de la programación algorítmica (Becerra y Waisbord, 2021). En tanto, los medios de comunicación mejor preparados para intervenir en el ecosistema convergente son los que tienen la escala suficiente para la diversificación y producción de contenidos multiplataforma.

Existe evidencia de que los ecosistemas digitales concentran el consumo y la distribución de contenidos pese al crecimiento exponencial de la oferta. Por ejemplo, más de la mitad de las noticias más clickeadas sobre COVID-19 en redes sociales en la Argentina fueron producidas por los tres primeros jugadores del mercado infocomunicacional digital. En tanto, ocho de los diez grupos mediáticos que más *engagement* lograron se ubican en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Zunino *et al.*, 2022), lo que expresa que la concentración económica consolida una centralización geográfica de la producción con consecuencias sobre el temario y los encuadres de los asuntos públicos.

El corolario resulta obvio: la multiplicidad de pantallas no es sinónimo de ruptura de la posición dominante de los grupos mediáticos de mayor escala. En tanto, la homogeneidad de contenidos informativos sobre los asuntos públicos puestos en circulación resulta contradictoria con la premisa normativa del pluralismo, aun en un ecosistema que multiplicó la oferta y diversificó los consumos.

4. Crisis de los regímenes de verdad: ¿fin del periodismo?

La última tesis intenta ser provocadora y aporta un disparador de interés para el escenario actual. Asistimos a una crisis extendida de los regímenes de verdad (Harsin, 2015). El periodismo –entre otras instituciones– ha perdido potencia como actividad socialmente legitimada para la construcción de narrativas verosímiles sobre el acontecer social. Desde una mirada funcionalista, la vigilancia del

entorno *-watchdog-* ha sido abandonada como tarea central de los medios informativos que, además, han cedido a los poderes fácticos el rol de controlarse a sí mismos (Bennett y Livingston, 2018). La falta de regulación estatal sobre las estructuras que condicionan los flujos informativos expone un vacío que es aprovechado por las empresas, que aplican unilateralmente sus políticas de uso, convirtiéndose en editoras informativas producto del desacople entre producción y circulación, hecho que afecta a la libertad de expresión (Becerra y Waisbord, 2021).

Es tiempo de repensar: ¿qué periodismo para qué sociedad? El interrogante no tiene una respuesta unívoca y está en zona de redefiniciones. En las condiciones actuales de precarización, concentración, datificación y crisis de credibilidad, la función periodística legitimada de construir información socialmente relevante se resquebraja, al mismo tiempo que lo hacen los estándares de pluralismo y calidad informativa. La profesión, al menos en el circuito *mainstream*, devino crecientemente edición acelerada de fuentes externas, permeable como pocas veces a factores de poder exógenos con repercusiones endógenas.

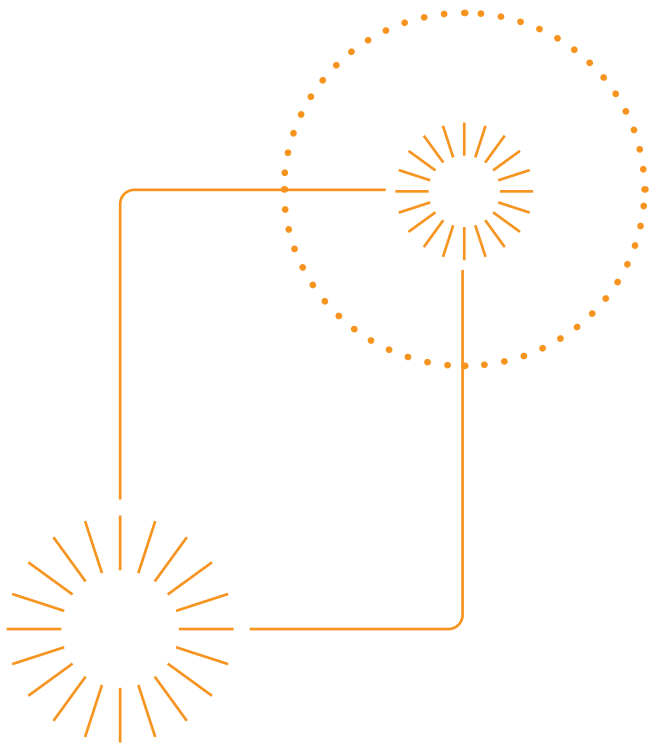
Sin embargo, no se trata de sentenciar el fin del periodismo cuando sobra evidencia sobre la complejidad y contradicción de los procesos sociales que, aún en este contexto, hacen nacer nuevos formatos y nichos de información de calidad. Se trata de caracterizar la magnitud de una crisis sistémica nodal para la vida democrática y de repensar colectivamente nuevas incumbencias, funciones y marcos regulatorios tendientes a garantizar condiciones dignas para una producción informativa profesional, legitimada socialmente y capaz de garantizar un debate público robusto e informado.

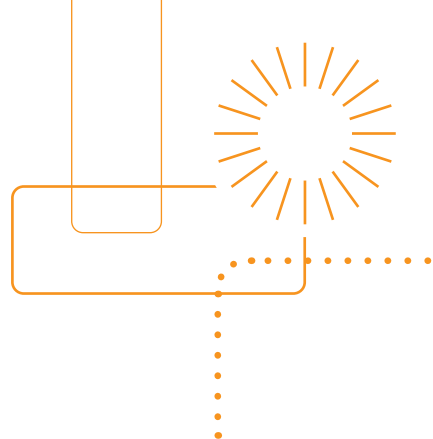
Bibliografía

Becerra, M. (2015). *De la concentración a la convergencia. Políticas de medios en Argentina y América Latina*. Buenos Aires: Paidós.

- Becerra, M. y Waisbord, S. (2021). La necesidad de repensar la ortodoxia de la libertad de expresión en la comunicación digital. *Desarrollo Económico*, 60(232), 295-313.
- Bennett, W. L. y Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122-139. Disponible en <https://doi.org/10.1177/0267323118760317> [última consulta: 20 de abril de 2023].
- Boczkowski, P. (2022). *Abundancia. La experiencia de vivir en un mundo pleno de información*. San Martín, Pcia. de Buenos Aires: UNSAM Edita.
- Casero-Ripollés, A. (2020). Impact of covid-19 on the media system. Communicative and democratic consequences of news consumption during the outbreak. *Profesional de la Información*, 29(2), 1-11. Disponible en <https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.23> [última consulta: 20 de abril de 2023].
- Fürst, S. (2020). In the service of good journalism and audience interests? How audience metrics affect news quality. *Media and Communication*, 8(3), 270-280. <https://doi.org/10.17645/mac.v8i3.3228> [última consulta: 20 de abril de 2023].
- García Canclini, N. (2019). *Ciudadanos reemplazados por algoritmos*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara-CALAS y UNSAM Edita.
- Gil de Zúñiga, H., Weeks, B. y Ardèvol-Abreu, A. (2017). Effects of the News-Finds-Me Perception in Communication: Social Media Use Implications for News Seeking and Learning About Politics. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 22(3), 105-123. Disponible en <https://doi.org/10.1111/jcc4.12185> [última consulta: 20 de abril de 2023].
- Habermas, J. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research. *Communication Theory*, 16(4), 411-426. Disponible en <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x> [última consulta: 20 de abril de 2023].
- Harsin, J. (2015). Regimes of Posttruth, Postpolitics, and Attention Economies. *Communication, Culture and Critique*, 8(2), 327-333. Disponible en <https://doi.org/10.1111/cccr.12097> [última consulta: 20 de abril de 2023].
- Miguel de Bustos, J.C. e Izquierdo Castillo, J. (2019). ¿Quién controlará la Comunicación? El impacto de los GAFAM sobre las industrias mediáticas

- en el entorno de la economía digital. *Revista Latina de Comunicación Social*, 74, 803-821. Disponible en <https://doi.org/10.4185/RLCS> [última consulta: 20 de abril de 2023].
- Newman, M., Fletcher, R., Robertson, C., Kirsten, E. y Nielsen, R. (2022). *Digital News Report 2022* (Vol. 53, Issue 9). Disponible en https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-06/Digital_News-Report_2022.pdf [última consulta: 20 de abril de 2023].
- Retegui, L. (2020). Métricas y cuantificación del rendimiento individual de los periodistas Un estudio en el interior de una sala de redacción. *Austral Comunicación*, 9(1), 45-67. Disponible en <https://doi.org/10.26422/aucom.2020.0901.ret> [última consulta: 20 de abril de 2023].
- Statista (2023). Empresas más valiosas del índice Dow Jones en 2023. Statista. Disponible en <https://es.statista.com/estadisticas/657179/dow-jones-empresas-con-mayor-valor-de-capitalizacion-bursatil/> [última consulta: 20 de abril de 2023].
- Van Aelst, P., Strömbäck, J., Aalberg, T., Esser, F., de Vreese, C., Matthes, J., Hopmann, D., Salgado, S., Hubé, N., Stępińska, A., Papathanassopoulos, S., Berganza, R., Legnante, G., Reinemann, C., Sheafer, T. y Stanyer, J. (2017). Political communication in a high-choice media environment: a challenge for democracy? *Annals of the International Communication Association*, 41(1), 3-27. Disponible en <https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551> [última consulta: 20 de abril de 2023].
- Zuazo, N. (2018). *Los dueños de internet. Cómo nos dominan los gigantes de la tecnología y qué hacer para cambiarlo*. Buenos Aires: Debate.
- Zunino, E., Kessler, G. y Vommaro, G. (2022). Consumo de información en redes sociales en tiempos de pandemia: Evidencias del caso argentino. *Inmediaciones de la Comunicación*, 17(1), 129-161.





Internet, desigualdades y políticas públicas

Bernadette Califano

A lo largo de estos 40 años de democracia se produjo un desarrollo sin precedentes de las redes de telecomunicaciones e Internet, acompañado por cambios en la forma de intervención del Estado y las políticas públicas en materia de conectividad.

A nivel mundial, en 1983 –año en que se retornaba al régimen constitucional en la Argentina– se afirmaban las bases de lo que sería la Internet que conocemos hoy. La red ARPANet, creada en 1969 dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se dividía en dos redes: una militar, denominada MILNet, y una científica, bajo el control de la National Science Foundation (NSFNet), que sería el pilar sobre el que se desarrollaría la Internet comercial. Desde su nacimiento, Internet no había salido del campo científico-estatal. Se había desarrollado gracias a la inversión del Estado, con la participación de científicos en campus universitarios, bajo un proceso de trabajo colaborativo y abierto.

En la década de 1990 comenzó la privatización de la red troncal de la NSFNet y la explotación comercial de sus usos y aplicaciones. En este contexto, prosperaron los discursos que asociaban el alcance global de las redes de telecomunicaciones, su ubicuidad y descentralización, con el fin de la soberanía

estatal.¹ Ilustrativa de estas ideas fue la célebre Declaración de Independencia del Ciberespacio que hiciera John Perry Barlow, fundador de la Electronic Frontier Foundation, en la que proclamó en 1996 el advenimiento de un ciberespacio soberano y autogobernado a partir del contrato social que establecerían los usuarios.

Sin embargo, con la evolución de las tecnologías y los usos y prácticas sociales asociados a Internet, comenzaron a asomar cada vez mayores demandas por la intervención del Estado. Estos reclamos han surgido fundamentalmente frente al poder de facto adquirido por los actores corporativos dominantes en el entorno digital, y a favor de la protección de derechos de los usuarios, en particular en materia de inclusión digital.

Brechas digitales

La Argentina ha alcanzado en 2022 un 91% de penetración de Internet, uno de los niveles más altos de América Latina, por detrás de Chile y Uruguay. No obstante, exhibe profundas brechas digitales para el acceso, uso y apropiación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Cuando estalló la pandemia por COVID-19 en 2020 se hizo evidente la necesidad de contar con un acceso a Internet de calidad para poder trabajar, acceder a educación, a servicios de salud y a formas de interacción social. Sin embargo, solo el 63,8% de los hogares urbanos contaba con una computadora y el 35,79% del total de hogares argentinos carecía de acceso fijo a Internet. Hacia fines de 2021 –cuando ya iban quedando atrás las medidas de aislamiento social preventivo–, se produjeron leves variaciones de aquel estado de situación: las computadoras hogareñas se habían incrementado en apenas un 0,4%,

1. Pohle, J. y Thiel, T. (2021). Digital sovereignty. *Internet policy review*, 9(4), 1-19.

mientras que el acceso a Internet por banda ancha había ascendido al 73%.

Una mirada en detalle de estos números revela desigualdades regionales que iluminan una disparidad de situaciones de conectividad. Entre ellas, el hecho de que los accesos a Internet estén concentrados en las principales provincias y ciudades argentinas. Así, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exhibe una tasa de penetración de Internet fijo del 122%, mientras que provincias como Santa Cruz, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes registran más del 50% de sus hogares desconectados. Hacia fines de 2022 aún existían diez provincias argentinas con más del 40% de sus hogares sin acceso a Internet de banda ancha.

Si tenemos en cuenta el tipo de tecnología utilizada, se observa una baja penetración de la fibra óptica, que se caracteriza por permitir mejores velocidades de transmisión de datos. Esta tecnología alcanza al 23% de los habitantes a nivel nacional. La principal forma de conectividad por banda ancha se produce a través del cable coaxial (54,39%), seguido por la fibra óptica (25,89%) y luego por la tecnología ADSL (12,58%) –porcentajes calculados sobre la base del total de accesos en el país, con datos del tercer trimestre de 2022–.

Hay que tener en cuenta que a lo largo de los últimos años las conexiones móviles a través de los *smartphones* han cobrado gran relevancia y modificado las formas de uso y navegación de Internet. En esta línea, la tasa de penetración de telefonía móvil es alta en la Argentina y se ha mantenido por encima del 120% a lo largo de la última década. En otras palabras, existen más líneas activas (casi 60 millones) que cantidad de habitantes. No obstante, el 90% de los accesos son modalidades de tipo prepago, es decir, aquellas en las que el usuario paga por adelantado los servicios de telecomunicaciones, con precios más elevados para la realización de comunicaciones móviles y para el consumo de datos.

Políticas públicas para el acceso a servicios de TIC

Una mirada panorámica sobre las políticas públicas para el desarrollo de Internet en el país, con foco en el acceso a servicios de conectividad, debería comenzar por sus principales antecedentes.

En este sentido, cabe recordar que a principios de la década de 1990 la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) se transfirió a manos de dos consorcios liderados por compañías trasnacionales: Telefónica de Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A. Ambos consorcios se dividieron la prestación monopólica del servicio básico telefónico en las zonas sur y norte del país, accedieron a la distribución del servicio de larga distancia bajo el régimen de exclusividad en sus respectivas regiones y a los servicios de valor agregado abiertos a la competencia (entre ellos, el servicio de acceso a Internet).

Entre otras medidas, a lo largo de aquella década se declaró de interés nacional el acceso de los habitantes a la red de redes y se encomendó a la Secretaría de Comunicaciones la elaboración de un plan estratégico para la expansión de Internet. Asimismo, se estableció que el servicio quedaba comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara el derecho a la libertad de expresión. También se promulgaron autorizaciones y resoluciones sobre tarifas de servicios de conexión por dial-up a través de la telefonía básica, y programas para la “Sociedad de la Información”.

En el año 2000, tras diez años de prestaciones en exclusividad, se desreguló el servicio básico telefónico y los servicios internacionales. Sin embargo, la estructura de mercado que quedó conformada durante aquellos años fue clave para impedir la entrada de nuevos oferentes al momento de liberalizar el sector. Así, se desarrolló un mercado de telecomunicaciones oligopólico, concentrado en pocos operadores.

Si bien la etapa de políticas de reforma pro-mercado de la década de 1990 permitió un incremento en los niveles de acceso a servicios básicos de telefonía, uno de sus legados más negativos fue el desequilibrio regional en materia de despliegue de infraes-

estructura. Las inversiones del sector privado se concentraron principalmente en las zonas urbanas con mayores ingresos y fracasaron las medidas tendientes a mitigar estos efectos negativos: principalmente, las obligaciones para el tendido de redes por parte de los operadores y la implementación de programas financiados por el Fondo del Servicio Universal para expandir la conectividad en áreas de bajos recursos. De este modo, se acentuó la brecha en el acceso a servicios de telecomunicaciones entre zonas urbanas y rurales.

Hacia fines de la primera década del siglo XXI se produjo un cambio en la forma de intervención del Estado en el sector de las telecomunicaciones: de un rol (des)regulador de la actividad privada, que procuraba corregir desequilibrios de mercado con fondos de servicio universal, el Estado pasó a implementar políticas caracterizadas por una fuerte inversión pública para el despliegue de infraestructura de conectividad.

En el año 2010 se lanzó el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, que contemplaba diversas iniciativas con el fin de brindar condiciones de acceso igualitarias a las tecnologías de información y comunicación para todos los habitantes. Uno de los ejes principales del Plan consistió en el despliegue de una Red Federal de Fibra Óptica (ReFeFO), cuya operación quedó en manos de ARSAT, empresa satelital privada de propiedad estatal creada en 2006. Entre los objetivos para el tendido de la ReFeFO se hallaba el de subsanar los desequilibrios regionales en materia de acceso a redes de alta capacidad de transmisión por medio del tendido de fibra óptica en zonas geográficas donde no llegaban los grandes operadores privados, a fin de dinamizar la provisión de servicios y promover la competencia en el tramo mayorista de la red. Se buscaba, particularmente, lograr una reducción de precios y una mejora en la calidad del servicio, junto con la promoción del rol de las cooperativas de servicios públicos y PyMEs locales.

Conviene destacar que el tendido, ampliación, iluminación y comercialización de servicios de la ReFeFO ha sido una de las escasas políticas públicas con continuidad a lo largo de gobiernos de distinto signo político en estos 40 años de democracia.

Tras el lanzamiento del Plan Argentina Conectada, durante el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, entre 2010 y 2015 se realizó el 95% de la obra civil troncal de la red de fibra óptica (un despliegue inédito teniendo en cuenta el plazo), se iluminó el 25% (8.090 kilómetros) y se alcanzaron 500 nuevas localidades que antes carecían de infraestructura en la zona.²

En diciembre de 2015, tras la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, se produjo un cambio drástico en la forma de intervención del Estado en materia de medios de comunicación y TIC.³ Varios programas estatales enmarcados en políticas de conectividad más amplias –entre los que se hallaban el Plan Conectar Igualdad, que brindaba *netbooks* a estudiantes de secundaria de escuela pública, y el desarrollo de la Televisión Digital Abierta– fueron reducidos o desfinanciados. No obstante, el tendido de infraestructura de banda ancha exhibió continuidad, renombrado como “Plan Federal de Internet” en 2016. Si bien el presupuesto para transferencias del tesoro a ArSat se redujo en un 93% y el desarrollo de la ReFeFO fue financiado con fondos del Servicio Universal, en esta etapa se avanzó en la iluminación de las redes troncales, superando los 30.000 kilómetros y en la instalación de nodos de acceso en distintas localidades del país, llegando a 660 clientes (ISP) en servicio.

En diciembre de 2019 asumió como presidente de la Nación Alberto Fernández, cuya gestión estuvo signada por la pandemia a causa de la COVID-19. Las medidas de aislamiento preventivo y distanciamiento social obligatorio, dispuestas en marzo de 2020 para mitigar la expansión y contagio del virus, revelaron rápidamente las brechas y desigualdades que persistían para el acceso a servicios de TIC en la Argentina, como describimos en el apartado anterior.

Si bien el gobierno reaccionó rápidamente a las mayores demandas de conectividad y promovió diversas iniciativas para

2. Ministerio de Planificación (2015). “Informe de control interno y gestión 2011-2015”. Buenos Aires, Argentina.

3. Califano, B. (2019). “Urgencias públicas e intereses privados: la regulación de medios en la agenda del gobierno argentino (2015-2019)”. *Ensamblés*, 6(11), 72-90.

facilitar la continuidad de los servicios de TIC en el contexto de pandemia, estas acciones configuraron una política pública reactiva y de orientación paliativa. Una segunda etapa se inició a fines de agosto de 2020, cuando se procuró regular los servicios de TIC como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, y establecer mayores potestades regulatorias para la fijación de precios (DNU N°690/2020). Sin embargo, esta medida –promulgada por decreto y sin el acuerdo del sector privado– condujo a una inmediata confrontación con las principales empresas del sector, que iniciaron juicios contra el Estado que tornaron inviable, en los hechos, la efectiva regulación de las TIC como servicios públicos.⁴

Por otro lado, se pusieron en marcha diversos programas para cubrir las necesidades de conexión de zonas vulnerables e instituciones educativas, y se relanzó el Programa Conectar Igualdad en 2022. Asimismo, en el marco del Plan Nacional de Conectividad “Conectar” se planificó un incremento de la infraestructura y de la capacidad operativa de la Red Federal de Fibra Óptica. Entre diciembre de 2019 y mayo de 2022 se avanzó con la actualización tecnológica de la red troncal y se sumaron 363 nuevos clientes (ISP) en servicio. Al cierre de este artículo, la ReFeFO contaba con un total de 32.585 kilómetros de fibra iluminada y 1.118 localidades conectadas, con llegada a menos del 50% de la población argentina.⁵

En síntesis, se destaca la continuidad –a lo largo de diferentes gobiernos democráticos– de una política pública que ha tenido en cuenta la relevancia del acceso a Internet como motor de desarrollo y de inclusión social, y que ha procurado articular inversión estatal en el despliegue de infraestructura de red con la prestación de servicios de última milla por parte del sector privado.

4. Califano, B. (2022). “Políticas para la conectividad y el acceso a internet durante la pandemia: impactos limitados sobre desigualdades preexistentes”. *Voces en el Fénix*, 12(86), 60-67.

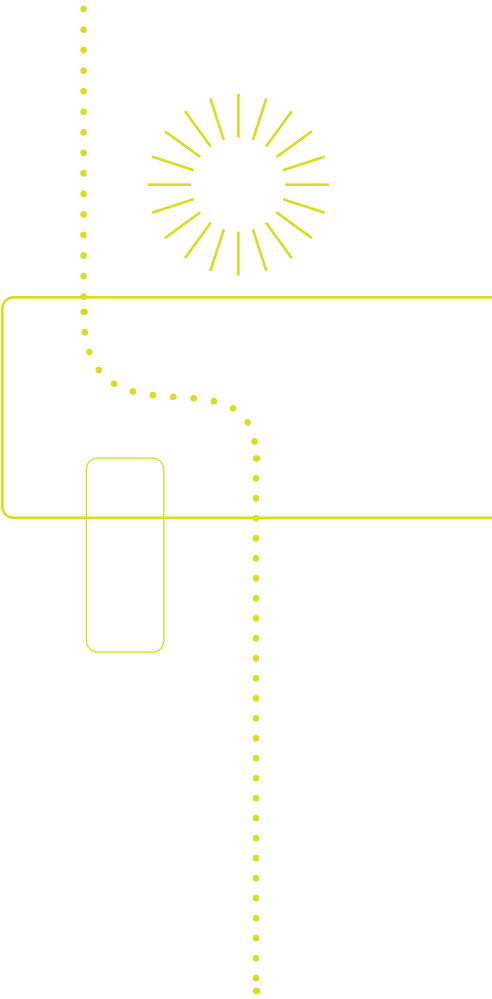
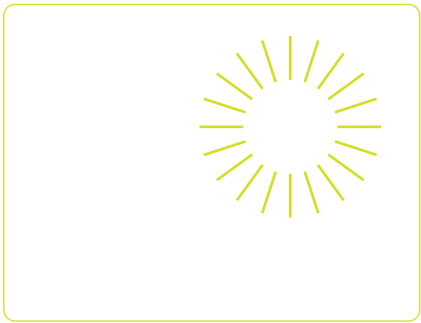
5. Datos disponibles en: <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/telecomunicaciones-y-conectividad/conectar/red-federal-de-fibra-optica> [última consulta: 13 de abril de 2023].

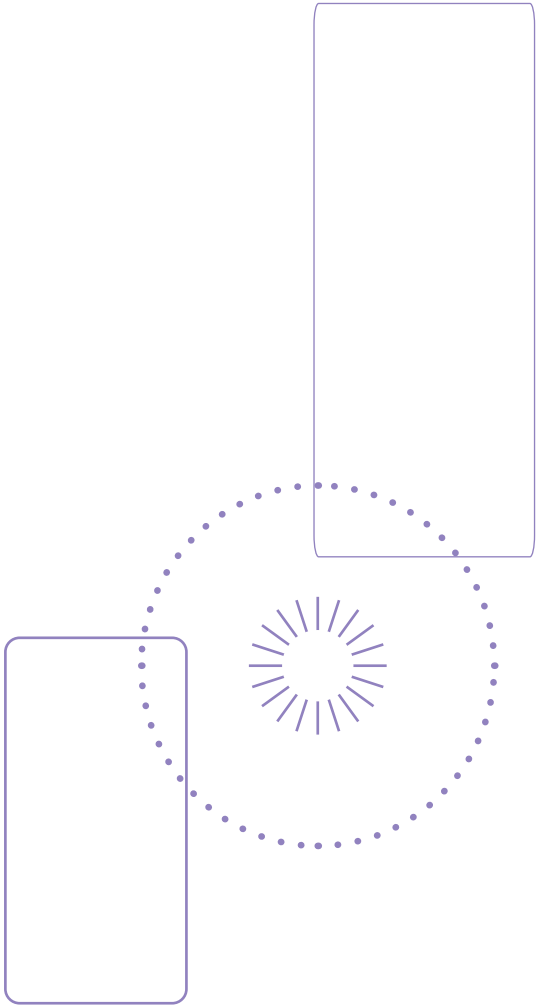
Lamentablemente, cabe señalar que varias de las metas iniciales previstas para la construcción de la Red Federal de Fibra Óptica en 2010 no han sido logradas ni siquiera en 2023, al cumplirse 40 años de democracia. Entre ellas, la proyección de alcanzar al 97% de la población argentina y el objetivo de conectar el 100% de las escuelas públicas del país. Se trata de dos deudas pendientes que, en caso de no ser saldadas, se tornarán cada vez más críticas para lograr una verdadera inclusión digital.

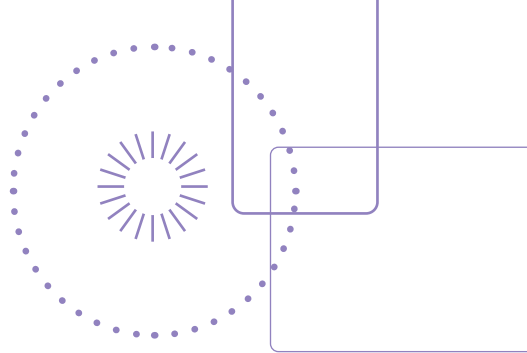
En estas cuatro décadas de democracia ni el mercado ni el Estado han podido cerrar las distintas brechas digitales que aún persisten a lo largo y ancho del país. Las desigualdades se manifiestan no solo en términos de las diferencias en el acceso material a redes y equipamiento informático, sino también en las distintas tecnologías utilizadas, en la disparidad de las velocidades de conexión, en los dispositivos y soportes de conectividad, en los niveles de alfabetización digital, en las habilidades y motivaciones a partir de las cuales los usuarios hacen uso de estas tecnologías, y en las consecuencias que estas diferencias conllevan para el desarrollo social, cultural y educativo de las personas.

En este sentido, resulta primordial lograr un acceso universal a Internet en condiciones asequibles, equitativas y de calidad, con el objetivo de disminuir las desigualdades sociales y garantizar el ejercicio de toda una serie de derechos que hoy ya no son posibles sin conectividad.

En foco







Justicia de género en línea: navegar, naufragar, insistir

Florencia Enghel

Había transcurrido una década desde el retorno a la democracia en la Argentina para cuando se volvió posible acceder a enlaces de Internet en el país. La primera conexión digital, que comunicó en red a todas las universidades públicas a través del dominio .edu.ar, se materializó en abril de 1994. La comercialización de la nueva tecnología recién empezaría un año más tarde, cuando un monopolio integrado por las empresas Telefónica y Telecom la ofreció a la venta para personas y empresas.

Los inicios de la conectividad coincidieron con el proceso de reforma de la Constitución Nacional argentina, que, entre otros cambios orientados a garantizar la ampliación de derechos, incorporó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. La Convención –un tratado internacional adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas– definió la discriminación contra las mujeres¹ y estableció que los estados nacionales son responsables de poner-

1. Tal como se la entendía al momento de la firma de la Convención. Para una breve historia de la posición y la labor de las Naciones Unidas respecto de la igualdad de género, ver <https://www.un.org/es/global-issues/gender-equality> [última consulta: 5 de mayo de 2023].

le fin. La incorporación de esa responsabilidad a la Constitución se logró² al mismo tiempo que múltiples grupos de mujeres, se definieran como feminismos o no, se preparaban para participar en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer prevista para septiembre de 1995 en Pekín (China), mediante una intensa labor organizativa y política.³

Conectar el módem y corresponder por email: esperanza y presencia

En el contexto de la inicialmente lenta pero segura expansión de Internet y de los preparativos para la Conferencia de Pekín –que habría de marcar un antes y un después en tanto llamado a solucionar la situación injusta de las mujeres respecto de los varones a nivel mundial– los feminismos empezaron a explorar cómo conectarse de manera digital. La red les ofrecía, en principio, la posibilidad de organizarse a diversas escalas y de dialogar a la distancia sobre cuestiones íntimas y urgencias políticas de manera ágil y segura.⁴ Recibida con curiosidad y esperanza, la conectividad se incorporó a las agendas feministas como interrogante a

2. El logro fue producto, entre otros factores, del esfuerzo del Consejo Nacional de la Mujer en su primera etapa. Para una breve historia ver Lopreite, Débora y Rodríguez Gustá, Ana Laura (2021), “Feminismo de Estado en la Argentina democrática (1983-2021): ¿modelo aspiracional o realidad institucional?” *Revista SAAP*, Vol. 15, N° 2, noviembre, 287-311.

3. Esa labor tuvo que ver tanto con la práctica tanto de la política a nivel institucional (al interior de los partidos políticos y de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como de lo político –las diversas formas de articular y disputar poder en la sociedad, que durante la década de 1990 incluyeron, pero no se limitaron a, la acción de académicas, integrantes de ONG, organizadoras de los Encuentros Nacionales de Mujeres surgidos en 1986 y feministas auto-definidas de diferentes maneras–. Para más sobre la distinción entre la política y lo político, ver Mouffe, Chantal (2007), *En torno a lo político*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

4. A diferencia de los mensajes por fax, que se transmitían independientemente de que la destinataria estuviera a tiro de recibirlos y por ende no garantizaban privacidad.

develar en la práctica y como promesa de democratización. En la transición del *en persona* al *en línea* y del pasado al futuro, las mujeres podrían, de una buena vez, vivir en una Argentina diferente: justa, equitativa y libre de violencias. En ese momento usar Internet implicaba encender un módem desde una computadora para conectarlo al teléfono de línea, y activar así el servicio de correo electrónico. Dado que el tiempo de uso del módem se medía y cobraba según la tarifa de una llamada local, los mensajes de correo se redactaban sin conexión. El acto de conectar el módem para mandar un mensaje daba lugar al mismo tiempo a la posibilidad de recibir correo entrante. El chirrido que hacía el módem al establecer la conexión anticipaba la expectativa. ¿Quién te había escrito? ¿Qué tenía para decirte? ¿Y cómo iba a contribuir a cambiar las cosas esa conversación?

La correspondencia feminista que empezó a circular in crescendo, yendo y viniendo por el ciberespacio, no fue solo interpersonal. Las listas de correo electrónicas, diseñadas para permitir que cada participante en un grupo se dirigiera al conjunto, se constituyeron en espacios de discusión, convivencia y coordinación. Cuando en septiembre de 1995 la delegación oficial de la Argentina a Pekín desconoció una serie de compromisos que el Estado había asumido para garantizar la igualdad de género, el mecanismo sirvió para hacerle frente: “Ante el discurso de la delegación oficial argentina en la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing 1995, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) argentinas repudiaron dicha intervención y emitieron este documento que fue firmado por aproximadamente trescientas ONG. El correo electrónico permitió que muchas organizaciones de la Argentina que no asistieron al Foro también se sumaran a la misma”⁵

5. Chiarotti, Noemí (1995), “Posición de las ONG Argentinas ante la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing”. INDESO Mujer. Disponible en <https://base.d-p-h.info/fr/fiches/premierdph/fiche-premierdph-2377.html> [última consulta: 8 de marzo de 2023].

Etiquetar reclamos: potencia y su contracara

Mientras las feministas debatían sobre la marcha diferentes visiones acerca de cómo poner la nueva tecnología al servicio de una sociedad igualitaria y solidaria, la evolución de Internet se aceleró a partir de la introducción de la World Wide Web y la posibilidad de usar un programa –el buscador– para recorrer –navegar– sitios y páginas. Expansiva, versátil, y cada vez más abarcadora, la red de redes se volvió sinónimo de transformación. Del módem conectado vía los teléfonos de línea en los hogares, característico de mediados de la década de 1990 pasamos, pocos años más tarde, a los teléfonos móviles conectados por wifi. Los buscadores coexisten hoy con las redes sociales surgidas en la primera década del siglo XXI en una competencia feroz, algoritmos mediante, por nuestra atención. Este tránsito que describo de manera muy sucinta estuvo marcado además por una privatización progresiva de las infraestructuras digitales que, lejos de contribuir a eliminar desigualdades a nivel global, las acentuó, generando para un puñado de billonarios beneficios económicos y un poder comunicacional inéditos.⁶

¿Y las mujeres, en este contexto? Las que tenemos acceso a la conectividad, a las computadoras y teléfonos inteligentes que la instrumentan, y a los conocimientos necesarios para aprovecharla, hemos recurrido a las redes sociales como un espacio más –aunque no cualquiera– en el cual expresar deseos, defender la alegría, abrazar diversidades, explicar de mil y una maneras cómo la justicia de género significaría más democracia para todes, y reclamar soluciones urgentes a las violencias femicidas, y educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. En la Argentina, #NiUnaMenos y #AbortoLegal son hoy más que etiquetas: constituyen la sintaxis que resultó de –y que a

6. Según el ranking en tiempo real de la revista *Forbes*, cinco de los diez billonarios más ricos del mundo en marzo de 2023 acumularon sus fortunas en el sector de las tecnologías digitales. Tienen además en común el ser varones, blancos, y ciudadanos de los Estados Unidos. Disponible en <https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#245729d53d78> [última consulta: 22 de marzo de 2023].

su vez provocó– movidas primero grupales y luego colectivas organizadas por mujeres y diversidades para defender en voz alta el derecho a tener derechos. Pero el recurrir a las redes sociales implicó también problemas. Debimos y debemos enfrentar, en los espacios digitales, nuevas y viejas injusticias, desigualdades persistentes y recién inventadas, y violencias y abusos hipermódnos y clásicos.

Naufragar: infraestructuras de la desigualdad

No faltan investigaciones respecto de este problema que sobra. Es el caso, por ejemplo, de las muchas formas de violencia digital experimentadas en la Argentina por las mujeres que osan expresarse públicamente en redes sociales, especialmente por las periodistas, las funcionarias públicas, las candidatas políticas, las artistas y las activistas feministas que por sus posiciones y profesiones tienen un potencial poder multiplicador. Sabemos de los insultos, las descalificaciones y las amenazas que enfrentan. De las agresiones con connotaciones sexuales y los dichos sexistas que se les destinan. De las menciones que cuestionan su capacidad intelectual y los comentarios denigrantes sobre su apariencia física que deben digerir. Hemos aprendido a identificar ataques coordinados por parte de bots y troles misóginos. Antes de que en 2022 cambiara de dueño mucho se dijo –y algo se intentó hacer– acerca de Twitter como paradigma de las plataformas que propician estas formas de violencia.

En ausencia de políticas públicas y acuerdos intersectoriales para terminar con las hostilidades en línea, muchas mujeres, forzadas a defenderse de los ataques mediante tácticas individuales, terminan optando por limitar su participación: minimizan sus expresiones y resignan así protagonismo, o directamente se retiran de las redes. Deben lidiar con una trampa. Mientras que la expansión de los feminismos y la digitalización in crescendo de la vida cotidiana estimularon la expresión pública vía redes, las mujeres experimentamos ataques y castigos si y cuando las usamos para

expresarnos. Ese doblez nos lleva a considerar el silencio como solución, pero silenciarnos implica denegarnos la posibilidad de una ciudadanía plena que incluya el derecho a la comunicación como instrumento para la búsqueda en común de soluciones.

La tensión entre expresión y silencio mediada por las violencias digitales contra las mujeres no es el único problema que interfiere con el uso de Internet como espacio de posibilidad democrática. Los problemas varían según escalas de injusticia. ¿Qué quiero decir con esto? En general, las mujeres tenemos en común la desigualdad con los varones. Pero las características de esa desigualdad difieren según qué posiciones ocupemos en la estructura social, que por ende afecta a diferentes mujeres de maneras distintas, y a algunas más que a otras. La pandemia por COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020 y administrada en la Argentina mediante políticas de aislamiento y distanciamiento social, entre otras medidas, dejó al desnudo que la digitalización acelerada de la vida cotidiana fue especialmente cruel con las mujeres que no pueden afrontar el costo del acceso regular a Internet y a los dispositivos necesarios para conectarse. Aunque faltan datos sistemáticos sobre la brecha de género digital, esta fue evidente durante la pandemia. El impacto de la falta de conectividad de calidad sobre las mujeres de sectores populares fue tal que un organismo regional se vio compelido a llamar a los gobiernos de América Latina a crear una “canasta básica digital” para mitigarlo a futuro. El organismo admitió tácitamente, con su metáfora, que, así como no se puede vivir sin cubrir las necesidades alimentarias, tampoco se puede sobrevivir hoy sin Internet.

Democracia: dilemas y justicia de género

Así estamos hoy las mujeres en la Argentina, a 40 años del retorno de la democracia.

La falta de acceso a una conectividad de calidad afecta a demasiadas. Las violencias que nos tocan en línea rivalizan con las

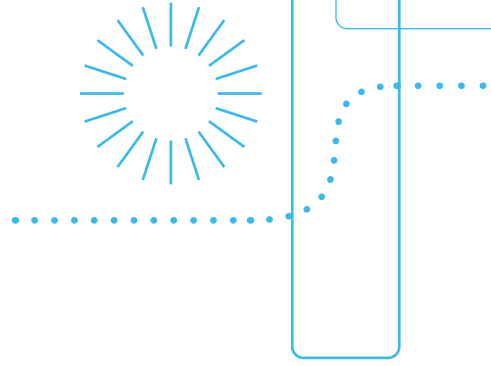
violencias que nos duelen en persona. Las que tenemos acceso a lo necesario para expresarnos públicamente en espacios digitales no tenemos libertad –garantizada infraestructuralmente– para discutir en redes sociales algunas de las cuestiones que nos importan. Estamos hartas de tener que seguir defendiendo el derecho a debatirlas. Discutir con los varones y pelear con las lógicas comerciales e institucionalizadas que interfieren con nuestra participación en lo digital nos interrumpe, nos distrae, demora nuestros esfuerzos por avanzar. ¿Qué hacer? ¿Resistir? ¿Abandonar? ¿Retirarnos a espacios exclusivos para mujeres? ¿Otra vez sopa?

Voy llegando al límite de la cantidad de palabras que este texto que fui invitada a escribir puede tener, y me doy cuenta de que estoy frunciendo el ceño frente a la computadora. No tengo respuestas definitivas a estas preguntas. En el contexto de un neoliberalismo digital que exacerba violencias e individualiza responsabilidades, salir por arriba de los dilemas que el presente de Internet nos tira por la cabeza a las mujeres requerirá transformar Internet para todes. Garantizar el acceso equitativo a la conectividad, y *desviolentar* –palabra que no existe pero debiera, así que la invento– la posibilidad de usarla. Pasa por ahí la noción de justicia de género, noción debatida y no unívoca, claro, como toda idea potencialmente útil para los feminismos: por producir igualdad para las mujeres, pero no a expensas de otras, sino solidariamente, maximizando y redistribuyendo democracia para todes.

Pienso en esto mientras me llega un correo electrónico: “Compañeres, ¿hay entre nos alguna abogada feminista en CABA que trabaje con violencia de género para enlazarla con una amiga? En tal caso, ¿me pasarían su contacto a mi correo o podrían sugerirme alguna de las instituciones u organizaciones que no estén saturadas para el caso? ¡Gracias!”. La consulta me alcanza por medio de RIMA, la Red Informativa de Mujeres de Argentina, una lista feminista de distribución electrónica creada en el año 2000 que, combinando flexibilidad, inventiva, ensayo y error y persistencia ante las sucesivas transformaciones del entorno digital que

le tocó transitar,⁷ se sostiene como un espacio vibrante de democracia y diversidad. Está claro lo que me dice el mensaje de RIMA. Hay que insistir.

7. Para una historia de RIMA, ver Friedman, Elisabeth Jay (2017), “La Red Informativa de Mujeres de Argentina: Construyendo un Contrapúblico”. En *Interpreting the Internet: Feminist and Queer Counterpublics in Latin America*. University of California Press (traducción al castellano de María de la Paz Díaz). Disponible en <https://redrimaweb.wordpress.com/2017/04/19/la-red-informativa-de-mujeres-de-argentina-construyendo-un-contrapublico-por-elisabeth-jay-friedman/> [última consulta: 5 de mayo de 2023].



Cultura memética y democracia

Juan Ruocco

4chan es un *imageboard* (tablero de imágenes) de Internet, un tipo de foro donde los usuarios pueden postear una foto con un comentario y con eso se crea un *thread* o hilo que se comparte en una misma *homepage* (página de inicio).

Los posts están ordenados por subforos (canales) y por orden de aparición. Los más exitosos (los que generan más comentarios e interacciones) permanecen más tiempo en la home y los que no generan interacciones, o muy pocas, se borran. Luego de un tiempo, los posteos se archivan y los más irrelevantes se borran.

4chan se divide en canales y los hay de todo tipo. Pero el que más notoriedad logró alcanzar es /pol/, el canal dedicado a la “incorrección política”. Christopher Poole, un estudiante de (por entonces) 15 años, de Nueva York, conocido como “Moot”, o “Mootykins”, creó 4chan en su habitación un 13 de octubre del año 2003.

En el lapso de trece años desde su creación, 4chan pasaría de ser una marginal comunidad *on line*, a convertirse en uno de los sitios web con mayor capacidad de influencia del mundo, hecho que se volvería público gracias a la participación del sitio en diferentes acontecimientos pero, sobre todo, en el impulso que dio a la

campana presidencial de Donald Trump en 2016, la que lo llevaría a ser el 45° presidente de los Estados Unidos.

Esta progresión desde los márgenes de Internet al centro de la escena política se daría por una combinación de factores. En primer lugar la expansión de Internet como medio de comunicación masivo, en segundo la cultura del troleo (*trolling*), y en tercer lugar la creación/difusión de memes como artefacto cultural definitivo de la época.

Memes y troleo

El primero de los tres puntos recién mencionados no necesita mucha explicación, porque todos hemos sido testigos del progresivo avance de Internet a lo largo de los años. Este libro, en parte, es testigo de ello. Desde sus inicios en la década de 1970 como una red de comunicación interuniversitaria conocida como Arpanet a los tiempos del 4G, pasando por los años de los módems dial-up (conexión vía teléfono) y la banda ancha. El progresivo aumento de la velocidad de transferencia de datos, la mayor infraestructura y la universalización de los teléfonos móviles con conexión a Internet marcaron el triunfo de esta tecnología por encima de todas las demás.

En segundo lugar, el troleo o *trolling* es un concepto que refiere a un tipo de conducta en línea que implica provocar, molestar o irritar a otros usuarios de Internet de manera intencional. Los trolls –o troles– pueden hacer comentarios ofensivos, publicar contenido controversial o simplemente causar problemas en las redes sociales, foros, chats, juegos en línea o sitios web. El objetivo principal de los trolls es perturbar y distraer a los demás usuarios, generar controversia y obtener una respuesta emocional de ellos. Los trolls disfrutaban a menudo de la atención negativa que reciben, y buscan alimentar el caos y la discordia.

Esta conducta forma parte fundamental de la cultura “chane-ra”. Desde sus inicios los usuarios de 4chan viven en una especie de guerra continua entre sí mismos para ver quién trolea más a

quién, dado que esto genera interacción y la interacción es premiada dándole mayor relevancia en la homepage a los posteos con mayor interacción. Pero esta conducta fue abarcando progresivamente otras esferas del discurso público y no se circunscribió solo al propio sitio.

El primer enfrentamiento público y organizado de 4chan se dio en un incidente contra la Iglesia de la Cienciología. En 2008 un usuario anónimo filtró un video de Tom Cruise dando una charla sobre los beneficios de esta pseudo iglesia, video que fue eliminado de YouTube a pedido de la organización religiosa. La comunidad de 4chan lo tomó como un ataque contra la libertad de expresión en Internet y organizó una serie de intervenciones contra esa iglesia, que incluyeron ataques a su página web y manifestaciones frente a sus sedes con máscaras de Guy Fawkes, del cómic “V de Vendeta”. Parte de la comunidad de 4chan devenida en Anonymous participaría luego en protestas y acciones en línea contra diferentes organismos estatales y bancos en el movimiento “Occupy Wall Street”, tras la crisis financiera de 2008.

Años más tarde, en el incidente conocido como Gamergate todos estos factores tendrían un giro extraño. Gamergate comenzó cuando la desarrolladora de videojuegos Zoe Quinn subió su juego *Depression Quest* a Internet en 2013. A pesar de recibir buenas críticas, un exnovio de Quinn la acusó de engañarlo con un periodista de Kotaku, un sitio especializado en reseñas de videojuegos, lo que provocó una ola de ataques y acoso hacia ella, en su mayoría orquestados por la comunidad de 4chan y sitios afines. Los ataques incluyeron amenazas de muerte y publicación de datos personales. Este incidente llamó la atención de los medios de comunicación y demostró el poder de fuego de la comunidad de 4chan. Este hecho sentó un precedente para la elección presidencial de 2016.

El último elemento que nos queda por explicar son los memes. En 1976 el biólogo Richard Dawkins introdujo el término “meme” en una de sus obras clásicas: *El gen egoísta*.¹ Su definición, un tanto

1. Dawkins, Richard (1976). *The Selfish Gen*, Oxford: Oxford University Press. [Traducción al castellano: *El gen egoísta*, Madrid: Salvat Editores, 1990.]

polémica, tenía por objetivo compatibilizar la teoría de la evolución de Darwin, aplicándola a la cultura humana. O al menos pensar la cultura en los mismos términos de transmisión de información de la genética, es decir, de unidades que contienen información pasible de transmitirse mediante la copia. Durante muchos años y a través de varios intelectuales como Danniell Dennet y Susan Blackmore, que se sumaron al programa “memético”, este concepto se fue desarrollando hasta alcanzar cierta madurez. Pero en los inicios de la década de 2000 este campo fue perdiendo terreno hasta que incluso el *Journal of Memetics*, su publicación académica más importante, dejó de editarse.

Esta idea “fuerte” de meme (como unidad básica de la cultura) tal como fue planteada en sus inicios fue dejando lugar a explicaciones más “blandas” que circunscriben a los memes al ámbito de la cultura digital. En la actualidad la mejor definición de meme, en este sentido, es la que creó Limor Shifman, catedrática del departamento de Comunicación en la Universidad Hebrea de Jerusalem en su libro *Memes in Digital Culture*.² Shifman sostiene que un meme es: “(a) un grupo de ítems digitales que comparten características comunes de contenido, forma y/o postura, que (b) cada uno es creado con conciencia de los otros, y (c) que son circulados, imitados o transformados a través de Internet”.

Los memes son a 4chan lo que el concepto “revolución” fue al marxismo, “justicia social” al peronismo, o “libre mercado” al liberalismo. No hay uno sin el otro.

Memes y radicalización

Los memes para 4chan no solo han sido constitutivos de su identidad y fuente de un folclore propio del sitio que luego se expandió a toda Internet, sino que también han sido grandes vectores para todo tipo de ideas. En particular, para algunas ideas de extrema

2. Shifman, L. (2013). *Memes in Digital Culture*. Cambridge, Massachusetts: MIT.

derecha que fueron permeando la cultura del foro hasta casi convertirse en una especie de “sentido común”.

Anders Behring Breivik llevó a cabo el peor atentado terrorista en la historia de Noruega en julio de 2011, atacando la sede del gobierno y asesinando a 69 jóvenes en un campamento del Partido Social Demócrata en la isla de Utøya. En su manifiesto, “2083 a European Declaration of Independence” [2083 una Declaración de Independencia Europea], Breivik argumenta que la sociedad europea y occidental ha caído en la decadencia debido al nihilismo, el consumismo y la pérdida de tradiciones culturales. Según Breivik, este proceso coincide con la apropiación del poder político por parte de una elite formada al calor del marxismo cultural que instaló como ideología hegemónica el multiculturalismo. Según él, la inmigración masiva de árabes islámicos y la política de integración de las culturas europea e islámica esconde un proceso de exterminio de los “pueblos originarios” europeos conocido como “genocidio blanco”.

La idea de “genocidio blanco” permeó muy fuerte en la cultura chanera y fue uno de los factores que llevaron al foro a inclinarse a apoyar a Donald Trump para la campaña de 2016 después de que el entonces (incipiente) candidato dijera que iba a construir un muro para frenar la inmigración y que se lo haría pagar a México. Aunque la mayoría de los usuarios sostendría que el apoyo a Trump era “for the lulz” (por la risa) y como parte de un gesto metairónico afín a la cultura del sitio, sus efectos tendrían un alcance que excedería por completo las intenciones de sus autores.

A través de una serie de acciones coordinadas desde el foro, 4chan logró troleear al establishment demócrata, a los medios de comunicación y a las estrellas de Hollywood que salieron en respaldo de la candidata Hillary Clinton. Repitiendo la misma estrategia de troleo más memes utilizada años antes durante el Gamergate, los usuarios de 4chan lograron captar la atención de los medios de comunicación, que bautizaron a estos movimientos como la “alt-right” (derecha alternativa) y retroalimentaron su poder de fuego. La imagen de chicos malos y antisistema con la que eran presentados se volvió un atractivo. Si bien no se puede afirmar que Trump ganó

las elecciones gracias a 4chan tampoco se puede soslayar el efecto disruptivo que tuvieron los jóvenes trolls en esa campaña.

Sin embargo, las consecuencias de expandir la narrativa acerca del genocidio blanco con fines electorales tendría una serie de efectos colaterales difíciles de prever incluso para sus autores. El 15 de marzo de 2019 Brenton Tarrant entró a dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, y asesinó a 50 personas e hirió a otras 50 con su arma automática. Antes de pasar a la acción el atacante armó un posteo en 8chan donde pegó un link de la transmisión en vivo del ataque y dejó un manifiesto. En ese texto sostuvo lo mismo que Breivik, a quien citó, además, como inspiración: Europa y “Occidente” estaban siendo sometidos a un “genocidio blanco” y a un “gran reemplazo”. Su acción tenía por fin concientizar a la población general sobre este hecho e intentar poner un freno a ese proceso. En una de las partes más lúcidas del infame manifiesto Tarrant afirmaba que “los memes hicieron más por el movimiento etnonacionalista que cualquier manifiesto”.

Durante la mañana del 4 de agosto de 2019, un joven norteamericano de 21 años, Patrick Crusius, de Allen, asesinó con su AK-47 a 20 personas en un Walmart de El Paso, en el estado de Texas. En un manifiesto de tres páginas que subió al sitio 8chan dejó claro que la inspiración para este ataque no había sido otro que Brenton Tarrant.

El 15 de mayo de 2022 Payton Gendron perpetró un ataque en un supermercado de la localidad de Buffalo, Nueva York. En el ataque hirió a 13 personas, de las cuales fallecieron 11. El perpetrador transmitió todo el ataque desde su canal de Twitch y dejó un manifiesto de varias páginas. Dentro del manifiesto nombra como inspiración a Brenton Tarrant, de quien también copió la personalización de su rifle Bushmaster XM-15. El objetivo de su ataque fue definido con claridad: detener el genocidio blanco.

El 1 de septiembre de 2022 Fernando Andrés Sabag Montiel gatilló su arma Bersa calibre .22 frente al rostro de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Falló en los dos intentos. Sabag Montiel llevaba tatuado en su codo un “sol negro”, un símbolo creado

por las SS, la división de elite del régimen nazi, que Brenton Tarrant también llevaba en su pecho durante los ataques en Nueva Zelanda. El sol negro también ilustró la tapa del manifiesto de Tarrant y es utilizado en muchos memes de corte nazi que nacieron, circulan y se comparten en la “galaxia chanera”. Según reportes de periodistas especializados, en nuestro país existen al menos cuatro casos de jóvenes que fueron detenidos en operaciones conjuntas entre la Policía Federal y el FBI, a raíz de amenazas de asesinatos masivos publicadas por dichos usuarios en foros al estilo 4chan o plataformas de chat. Es evidente que la cultura memética incorporó estos elementos a su entramado de significado, representando esto un peligro que no se puede soslayar.

La memificación de teorías conspirativas de corte racista, xenóforas y supremacistas representa un peligro muy concreto para las democracias. Por memificación nos referimos al proceso de convertir en memes, ya sea de texto, video o imagen, una idea, como por ejemplo “el genocidio blanco”. Es decir, que muchos de los memes que se crean, circulan, se comparten y remixan en estos sitios tienen como trasfondo ideológico esta idea y por lo tanto se convierten en vectores voluntarios (o involuntarios) de ella.

Libertad de expresión y valores democráticos

El derecho a la libertad de expresión siempre ha sido uno de los pilares de la democracia. En nuestro país el derecho a la libertad de prensa está consignado en el artículo 14 de la Constitución, a la vez que garantizado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, firmado en 1969 y sancionado en nuestro país con fuerza de ley en 1984. Sin embargo, es interesante notar cómo en el apartado 5 del artículo 13 de dicha convención se sostiene que “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier

persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

Queda claro entonces que la libertad de expresión encuentra límites en su ejercicio cuando atenta directamente contra una persona o grupo de personas en virtud de diferencias étnicas, religiosas, nacionales o de idioma. En este sentido el problema de la tensión entre libertad de expresión (podríamos decir democracia formal) y valores democráticos (el contenido democrático de un sistema) queda resuelta, al menos en la teoría y en la jurisdicción de nuestras leyes. En este sentido, los discursos que abrevaran en estas prácticas pueden ser (si existiera la pericia técnica adecuada) castigados con el peso de la ley. Sin embargo, he aquí uno de los problemas: la ley argentina no tiene jurisdicción para sitios web que no estén radicados en la Argentina. Por lo tanto, la población de nuestro país queda expuesta a discursos racistas, xenófobos, o que van en contra de los derechos de las minorías sin que las autoridades argentinas puedan tomar cartas en el asunto. Esto complejiza en forma no menor la capacidad de respuesta adecuada del Estado argentino y de la justicia argentina para reprimir este tipo de discursos.

Es por eso que se necesita contar con otro tipo de herramientas más allá de los marcos legales, para poder neutralizar o al menos contrarrestar el alcance creciente de estos discursos radicalizados cuyo efecto último es socavar los valores democráticos sobre los cuales se constituye nuestra sociedad. En este sentido, existen muchos trabajos de investigación que intentan buscar respuestas a este fenómeno que se caracteriza por su novedad y la dificultad en su abordaje. Porque no solo es que el fenómeno en sí es nuevo sino que también está en discusión con qué tipo de modelo teórico podemos abordarlo para explicarlo, entenderlo y luego, neutralizarlo. En este sentido, la idea de “meme” me parece más que interesante porque permite crear desde genealogías de sentidos, a mapas de comunidades, velocidades de difusión y apariciones de nuevas estrategias.

Es para destacar, en este campo, el trabajo de Nicolas Koutonias, cuya tesis de maestría en la Universidad Erasmo en Países Bajos se titula “Weaponized Meta-Memetics: Measuring the Effectiveness